



Asamblea General

Distr. general
6 de agosto de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

48º período de sesiones

13 de septiembre a 1 de octubre de 2021

Tema 3 de la agenda

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Detención arbitraria

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria* **

Resumen

En 2020, trabajando en circunstancias excepcionales debido a la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en el marco de su procedimiento ordinario, aprobó 92 opiniones relativas a la detención de 221 personas en 47 países. También transmitió 55 llamamientos urgentes a 27 Gobiernos, así como 150 cartas de denuncia y otras cartas a 62 Gobiernos y, en dos casos, a otros agentes, en relación con al menos 651 personas identificadas. Algunos Estados informaron al Grupo de Trabajo de las medidas que habían adoptado para remediar la situación de las personas detenidas y, en muchos casos, se las puso en libertad.

Debido a la pandemia de COVID-19, el Grupo de Trabajo no pudo realizar visitas a los países durante el período que abarca el informe. Espera reanudar estas visitas en cuanto lo permita el contexto mundial en materia de salud y anima a los Estados a responder positivamente a sus solicitudes para realizar visitas.

El Grupo de Trabajo siguió formulando deliberaciones sobre cuestiones de carácter general para ayudar a los Estados y a las partes interesadas a prevenir y abordar los casos de detención arbitraria. Esto incluyó la formulación de la deliberación núm. 12 relativa a las mujeres privadas de libertad, que figura como anexo del presente informe.

En el informe, el Grupo de Trabajo también examina las siguientes cuestiones temáticas: a) la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos; b) los traslados forzosos de personas y la prohibición de la detención arbitraria; y c) la Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados.

* El anexo se distribuye sin revisión editorial oficial, únicamente en el idioma en que se presentó.

** Se acordó publicar este informe después de la fecha de publicación prevista debido a circunstancias ajenas a la voluntad de quien lo presenta.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Actividades del Grupo de Trabajo.....	3
A. Deliberaciones	3
B. Estudio sobre la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas.....	4
C. Tramitación de las comunicaciones dirigidas al Grupo de Trabajo en 2020	4
D. Visitas a los países	24
III. Cuestiones temáticas	24
A. Privación de libertad de los defensores de los derechos humanos	25
B. Traslados forzosos de personas y prohibición de la detención arbitraria.....	27
C. Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados	29
IV. Conclusiones	30
V. Recomendaciones.....	30
Annex	32

I. Introducción

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. Se le encomendó el mandato de investigar los casos de presunta privación arbitraria de libertad, de conformidad con las normas establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados. El mandato del Grupo de Trabajo, que fue precisado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50, comprende también la detención administrativa de los solicitantes de asilo y los inmigrantes. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. El mandato del Grupo de Trabajo fue prorrogado recientemente por tres años, mediante la resolución 42/22 del Consejo, de 26 de septiembre de 2019.

2. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo estuvo integrado por Sètondji Roland Jean-Baptiste Adjovi (Benin), José Antonio Guevara Bermúdez (México), Seong-Phil Hong (República de Corea), Elina Steinerte (Letonia) y Leigh Toomey (Australia). Al 1 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo estaba compuesto por Miriam Estrada-Castillo (Ecuador), Seong-Phil Hong (República de Corea), Mumba Malila (Zambia), Elina Steinerte (Letonia) y Leigh Toomey (Australia).

3. Entre abril de 2019 y abril de 2020, el Sr. Guevara Bermúdez ocupó el cargo de Presidente-Relator del Grupo de Trabajo, y la Sra. Steinerte y la Sra. Toomey ejercieron la Vicepresidencia. En el 87º período de sesiones del Grupo de Trabajo, en abril de 2020, la Sra. Toomey fue nombrada Presidenta-Relatora y la Sra. Steinerte fue reelegida Vicepresidenta.

II. Actividades del Grupo de Trabajo

4. Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo celebró sus períodos de sesiones 87º, 88º y 89º. En vista de las restricciones a los viajes debidas a la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo decidió reunirse en forma virtual por videoconferencia. Esto se debió únicamente a la pandemia mundial y en modo alguno sustituye sus reuniones presenciales.

5. A causa de la pandemia de COVID-19, el Grupo de Trabajo no pudo realizar visitas a los países durante el período que abarca el informe. Espera reanudar estas visitas en cuanto lo permita el contexto mundial en materia de salud y anima a los Estados a responder positivamente a sus solicitudes para realizar visitas.

6. A fin de facilitar la divulgación y el intercambio continuos de información durante la pandemia, el Grupo de Trabajo se reunió a distancia con los Estados y las organizaciones no gubernamentales durante todo el período que abarca el informe, lo que incluyó una reunión con la sociedad civil en diciembre de 2020, y durante su 90º período de sesiones, para recabar información sobre cuestiones relacionadas con la detención arbitraria y mejorar la comprensión de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

A. Deliberaciones

7. El Grupo de Trabajo siguió formulando deliberaciones sobre cuestiones de carácter general para ayudar a los Estados y a las partes interesadas a prevenir y abordar los casos de detención arbitraria.

8. A este respecto, el Grupo de Trabajo formuló su deliberación núm. 12 relativa a las mujeres privadas de libertad (véase el anexo). En la deliberación, el Grupo de Trabajo examina las dimensiones específicas de género de la detención arbitraria y proporciona orientación para ayudar a los Estados y otras partes interesadas a prevenir y abordar la detención arbitraria de mujeres en el sistema de justicia penal, la detención de inmigrantes, la detención administrativa, la cuestión de la atención médica y ciertos entornos privados. La deliberación también reconoce que no todas las mujeres experimentan la privación de libertad

de la misma manera, por lo que es necesario tener en cuenta la experiencia particular de las mujeres que ya se encuentran en situación de desventaja. El Grupo de Trabajo recuerda, en particular, que las mujeres que sufren formas múltiples e interseccionales de discriminación corren un mayor riesgo de ser privadas de libertad.

B. Estudio sobre la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas

9. En su resolución 42/22, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Grupo de Trabajo que realizara un estudio sobre la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas. La preparación del estudio comenzó en 2019, y el Grupo de Trabajo celebró consultas iniciales, elaboró un cuestionario y solicitó aportaciones de los Estados y otros interesados en materia de políticas de fiscalización de drogas. En el 63^{er} período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, celebrado en Viena en marzo de 2020, se organizó una sesión informativa sobre el estudio y se celebraron consultas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y otras partes interesadas. Además, los días 4 y 5 de marzo de 2021, el Grupo de Trabajo celebró una reunión virtual de consulta de expertos.

10. El Grupo de Trabajo presentó un informe sobre el estudio (A/HRC/47/40) al Consejo de Derechos Humanos el 2 de julio de 2021, en el contexto del 47^o período de sesiones del Consejo. En ese estudio el Grupo de Trabajo examina cómo las políticas en materia de drogas pueden acarrear vulneraciones de los derechos humanos relacionadas con la detención arbitraria y formula una serie de recomendaciones. Se basa en su propia jurisprudencia, en las posiciones adoptadas por otros mecanismos de derechos humanos y entidades de las Naciones Unidas y en las comunicaciones presentadas por los Estados y otras partes interesadas.

C. Tramitación de las comunicaciones dirigidas al Grupo de Trabajo en 2020

1. Comunicaciones transmitidas a los Gobiernos

11. En sus períodos de sesiones 87^o, 88^o y 89^o, el Grupo de Trabajo aprobó un total de 92 opiniones relativas a 221 personas en 47 países (véase el cuadro que figura más abajo).

2. Opiniones del Grupo de Trabajo

12. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, al transmitir sus opiniones a los Gobiernos, el Grupo de Trabajo señaló a su atención las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 1997/50 y 2003/31 y las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 6/4, 24/7 y 42/22, en las que esos órganos pedían a los Estados que tuvieran en cuenta las opiniones del Grupo de Trabajo y, de ser necesario, adoptaran las medidas adecuadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de su libertad e informaran al Grupo de Trabajo de las medidas que hubieran adoptado. Una vez transcurrido el plazo de 48 horas tras la transmisión de la opinión a los Gobiernos interesados, estas se remitieron a las fuentes pertinentes.

¹ A/HRC/36/38.

Opiniones aprobadas en los períodos de sesiones 87º, 88º y 89º del Grupo de Trabajo

Opinión núm.	Países y zonas	Respuesta del Gobierno	Personas afectadas	Opinión	Información de seguimiento recibida
1/2020	Camerún	Sí	Amadou Vamoulké	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
2/2020	Turquía	Sí	Abdulmuttalip Kurt	Detención arbitraria, categorías I, II y V	Ninguna
3/2020	Colombia	Sí	Ferney Salcedo Gutiérrez, Yulivel Leal Oros, Jesús Leal Salcedo, Miguel Ángel Rincón Santisteban, Carmen Iraidá Salcedo Gutiérrez, Josué Eliecer Rincón Duarte, María Teresa Rincón Duarte y Jerónimo Salcedo Betancourt	Detención arbitraria, categorías II, III y V	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno)
4/2020	Cuba	Sí	Aymara Nieto, Eliecer Bandera, Humberto Rico, José Pompa López, Melkis Faure, Mitzael Díaz y Silverio Portal	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Aunque el Sr. Rico, el Sr. Pompa López y el Sr. Portal fueron puestos en libertad, esto no supuso que se haya aplicado la opinión. (Información de la fuente)
5/2020	Bahrein	Sí	Ali Isa Ali Al-Tajer y otras 19 personas	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
6/2020	Egipto	No	Ahmed Tarek Ibrahim Abd El-Latif Ziada	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
7/2020	Argelia	No	El Fadel Breica	Detención arbitraria, categorías I, II y III	El Sr. Breica fue puesto en libertad el 10 de noviembre de 2019 y actualmente se encuentra en otro país. No se han adoptado nuevas medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
8/2020	Sri Lanka	No	Delankage Sameera Shakthika Sathkumara	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
9/2020	Mozambique	No	Songolo Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Ababa Anito, Dax Byamungu, Dominique Nepanepa Kahenga, Kibunga Kasindi, Mwenelwata Kitungano, Sikabwe Kiza, Charles Anzuruni M'massa, Sukuma Maenda, Mathias Mafataki Mahano, William Riziki, Amisi Shomari, Kaskil Sumail y Jacque Nsimba Vela	Detención arbitraria, categorías I, III y IV	Ninguna
10/2020	Federación de Rusia	No (retraso)	Aleksandr Solovyev, Vladimir Kulyasov, Denis Timoshin, Andrey Magliv, Valeriy Shalev, Ruslan Korolev, Viktor Malkov, Yevgeniy Dechko, Vyacheslav Osipov, Valeriy Rogozin, Igor Egozaryan, Sergey Melnik, Valentina Vladimirova, Tatyana Galkevich, Tatyana Shamsheva, Olga Silayeva, Aleksandr Bondarchuk y Sergey Yavushkin	Detención arbitraria, categoría I (Sres. Shalev, Korolev, Malkov, Rogozin, Egozaryan y Melnik y Sras. Vladimirova, Galkevich, Shamsheva y Silayeva) Detención arbitraria, categorías II, III y V (las 18 personas)	Algunas personas han sido liberadas de la prisión preventiva o del arresto domiciliario, pero el proceso penal contra ellas continúa o han sido condenadas. El Sr. Malkov falleció el 26 de abril de 2020 debido a una enfermedad. No se han adoptado nuevas medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
11/2020	China	Sí	Cheng Yuan, Liu Dazhi y Wu Gejianxiong	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Estas personas siguen detenidas. (Información de la fuente)
12/2020	Israel	No	Mustafa Hassanat	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
13/2020	Libia	No	Mustafa Taleb Younes Abdelkhalek Al Darsi	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
14/2020	Egipto	No (retraso)	Amal Fathy, Mohamed Lofty y un menor cuyo nombre conoce el Grupo de Trabajo	Detención arbitraria, Sra. Fathy (categorías I, II y III); detención arbitraria, Sr. Lofty y el menor (categoría I)	Ninguna

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
15/2020	Viet Nam	Sí	Phan Kim Khanh	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
16/2020	Viet Nam	Sí	Ngô Văn Dũng	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El 31 de julio de 2020, el Sr. Dũng fue condenado a 5 años de prisión, seguidos de 2 años de libertad condicional. Permanece detenido. La petición de otorgarle una indemnización carece de fundamento. (Información del Gobierno) No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. El Sr. Dũng sigue detenido. (Información de la fuente)
17/2020	Nicaragua	No	Miguel Mora y Lucía Pineda	Detención arbitraria, categorías I, II y III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
18/2020	República Bolivariana de Venezuela	Sí	Rubén Darío González Rojas	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
19/2020	El Salvador	No	Imelda Cortez Palacios	Detención arbitraria, categorías I, III y V	La Sra. Cortez Palacios fue puesta en libertad tras un veredicto de no culpabilidad. (Información del Gobierno)
20/2020	República Bolivariana de Venezuela	Sí	Héctor Armando Hernández Da Costa	Detención arbitraria, categorías I y III	El Sr. Hernández Da Costa sigue detenido. (Información de la fuente)
21/2020	Nicaragua	No	Amaya Eva Coppens Zamora, Atahualpa Yupanqui Quintero Morán, Derlis Francisco Hernández Flores, Hansel Amaru Quintero Gómez, Ivannia del Carmen Álvarez Martínez, Jesús Adolfo Tefel Amador, Jordán Irene Lanzas Herrera,	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Las 16 personas fueron puestas en libertad condicional en virtud de una ley de amnistía, que no eliminó sus antecedentes penales. El Gobierno aún no ha aplicado la opinión. (Información de la fuente)

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
			José Dolores Medina Cabrera Cabrera, María Margarita Hurtado Chamorro, Marvin Samir López Ñamendiz, Melvin Antonio Peralta Centeno, Neyma Elizabeth Hernández Ruiz, Olga Sabrina Valle López, Roberto Andrés Buchting Miranda, Wendy Rebeca Juárez Avilés y Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez		
22/2020	Hungría	Sí	Saman Ahmed Hamad	Detención arbitraria, categorías I, II y IV	El Sr. Hamad fue retenido en el centro de tránsito, de conformidad con la legislación húngara. Fue trasladado a un centro de acogida abierto, que abandonó para dirigirse a un lugar desconocido, incumpliendo así su obligación de cooperar y retirándose del procedimiento. El caso está cerrado y no es necesario adoptar nuevas medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno) El Sr. Hamad ha salido de Hungría y ahora reside en otro país. (Información de la fuente)
23/2020	Tayikistán y la Federación de Rusia	No (respuestas de ambos Gobiernos presentadas con retraso)	Maksud Ibragimov	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
24/2020	México	Sí	Mónica Esparza Castro y Édgar Menchaca Castro	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ambas personas fueron absueltas antes de la aprobación de la opinión. El fiscal presentó un recurso, que está pendiente. Las denuncias de tortura se están investigando y se está enjuiciando penalmente a los agentes

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
					sospechosos de estar involucrados. No se han otorgado reparaciones. (Información del Gobierno y la fuente)
25/2020	Burundi	No	Alexis Sebahene	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
26/2020	Túnez	Sí	Moncef Kartas	Detención arbitraria, categorías I y III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión, ya que la detención del Sr. Kartas no fue arbitraria ni contraria al derecho nacional o internacional. (Información del Gobierno)
27/2020	Nigeria	No	Omoyele Sowore	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
28/2020	México	Sí	Miguel Pérez Cruz	Detención arbitraria, categorías I y III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno y la fuente)
29/2020	Turquía	Sí	Akif Oruç	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. La causa del Sr. Oruç está pendiente ante el Tribunal Supremo. (Información de la fuente)
30/2020	Turquía	Sí	Faruk Serdar Köse	Detención arbitraria, categorías I, II y V	Ninguna
31/2020	Emiratos Árabes Unidos	Sí	Abdullah Hani Abdullah	Detención arbitraria, categorías I y III	El Sr. Abdullah fue detenido de conformidad con las normas y principios jurídicos aplicables en los Emiratos Árabes Unidos. Fue condenado mediante una sentencia firme en una causa penal ejecutable, en la que se cumplieron todos los procedimientos previstos en la legislación nacional, y fue juzgado ante un tribunal competente, justo,

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
					independiente e imparcial. Su detención actual no es arbitraria, y no se requieren medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno)
32/2020	China	No	He Fangmei	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Fue liberada el 10 de enero de 2020 y continuó su campaña. El 9 de octubre de 2020, fue detenida nuevamente e internada en un lugar desconocido designado por el Gobierno. No se han otorgado reparaciones ni indemnización. (Información de la fuente)
33/2020	Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita	Emiratos Árabes Unidos (no) Arabia Saudita (sí)	Loujain Alhathloul	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	La Sra. Alhathloul fue puesta en libertad el 10 de febrero de 2021, pero el período de prueba y las órdenes de prohibición de viajar siguen vigentes. Se ha presentado un recurso sobre la condena. (Información de la fuente)
34/2020	Emiratos Árabes Unidos	Sí	Abdullah Awad Salim al-Shamsi	Detención arbitraria, categorías I y III	El Sr. Al-Shamsi sigue detenido y su juicio está en curso. Desde principios de marzo de 2020, se han interrumpido todas las visitas a la prisión (debido a la COVID-19) y no se han permitido las llamadas telefónicas. Es vulnerable al COVID-19 debido a una enfermedad grave. (Información de la fuente)
35/2020	Australia	Sí	Jamal Talib Abdulhussein	Detención arbitraria, categorías IV y V	El 9 de enero de 2020 se concedió un visado de protección temporal al Sr. Abdulhussein, y se lo ha liberado de la detención de inmigrantes. (Información del Gobierno)
36/2020	Viet Nam	No (retraso)	Đào Quang Thục	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
37/2020	Myanmar	No	Zayar Lwin, Paing Phyto Min, Zaw Lin Htut, Kay Khine Htun, Paing Ye Thu y Su Yadana Myint	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Las personas están cumpliendo sus condenas y gozan de buena salud. (Información del Gobierno)
38/2020	República Unida de Tanzania	No	Tito Elia Magoti	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El Sr. Magoti fue puesto en libertad en enero de 2021 tras declararse culpable y pagar una multa. Pasó un año en prisión preventiva y no se presentó ninguna prueba ante el tribunal. (Información de la fuente)
39/2020	Nicaragua	No	Kevin Roberto Solís	Detención arbitraria, categorías I y III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
40/2020	Burundi	No	Jean Claude Hamenyimana	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
41/2020	Bahrein	Sí	Husain Ali Hasan Khamis y otras ocho personas	Detención arbitraria, categorías I y III	La Unidad Especial de Investigación no recibió denuncias en relación con la vulneración de los derechos de la mayoría de las personas, pero abrió su propia investigación a raíz de la opinión. Si se demuestra que se han vulnerado sus derechos como consecuencia de una detención o encarcelamiento ilegales, se las indemnizará. Se archivaron dos denuncias de tortura por falta de pruebas. (Información del Gobierno)
42/2020	Tailandia y Viet Nam	Tailandia (no) Viet Nam (sí)	Truong Duy Nhat	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El Sr. Nhat sigue detenido. (Información de la fuente)
43/2020	Kazajistán	Sí	Serikhzan Bilash	Detención arbitraria, categorías I, II y III	El Sr. Bilash completó su período de libertad condicional en diciembre de 2019 y a finales de 2020 salió de Kazajistán para dirigirse a otro país,

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
					donde reside actualmente. El 26 de junio de 2020 se modificó el artículo 174 del Código Penal para permitir a los jueces imponer una multa en lugar de una restricción de la libertad a las personas que han infringido la disposición de que se trata. (Información del Gobierno)
44/2020	República Bolivariana de Venezuela	Sí	Antonia de la Paz Yolanda Turbay Hernando	Detención arbitraria, categorías I y III	La Sra. Turbay Hernando fue puesta en libertad mediante un indulto presidencial el 31 de agosto de 2020. (Información de la fuente)
45/2020	México	No (retraso)	Brenda Quevedo	Detención arbitraria, categoría III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno y la fuente)
46/2020	Benin	No	Ignace Sossou	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Ninguna
47/2020	Turquía, así como Kosovo ²	Turquía (sí) Kosovo (no)	Mustafa Erdem, Yusuf Karabina, Kahraman Demirez, Cihan Özkan, Hasan Hüseyin Günakan y Osman Karakaya	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El 24 de febrero de 2021, la fiscalía especial de Kosovo presentó cargos contra varios funcionarios por la detención arbitraria y el traslado ilegal de las seis personas. No se han adoptado nuevas medidas para aplicar la opinión, incluida la puesta en libertad de las seis personas. (Información de la fuente)
48/2020	Turquía y Azerbaiyán	Sí (ambos Gobiernos)	Huseyn Abdullayev	Detención arbitraria, categorías I y III	El estado de salud física y mental del Sr. Abdullayev se está deteriorando, y en abril de 2021 inició una huelga de hambre para protestar por la falta de aplicación de la opinión. (Información de la fuente)

² Las referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
49/2020	Estados Unidos de América	No	Fernando Aguirre-Urbina	Detención arbitraria, categorías I, II, IV y V	Ninguna
50/2020	Cuba	No (retraso)	José Daniel Ferrer García	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. El Sr. García está bajo arresto domiciliario. (Información de la fuente)
51/2020	Malasia y Turquía	Sí (ambos Gobiernos)	Arif Komiş, Ülkü Komiş y cuatro menores	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	La detención y el encarcelamiento del Sr. Komiş y de su familia no fueron arbitrarios y se ajustan al derecho internacional. Así pues, no se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información del Gobierno de Malasia)
52/2020	Marruecos	No (retraso)	Ali Salem Bujmaa, alias Ali Saadouni	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
53/2020	Argelia	No (retraso)	Messaoud Leftissi	Detención arbitraria, categorías I, II y V	El Sr. Leftissi ha sido puesto en libertad desde que fue absuelto por el Tribunal de Apelación y exonerado de todos los cargos. Esta decisión es susceptible de recurso ante el tribunal de casación. Todos los procedimientos jurídicos se ajustaron a las leyes nacionales y se le garantizó el debido proceso. No solicitó indemnización por su detención preventiva. (Información del Gobierno)
54/2020	Kuwait	Sí	Zuhair Abdulhadi Haj Al Mahmeed	Detención arbitraria, categorías I and III	Todos los procedimientos judiciales y jurídicos emprendidos en el caso del Sr. Al Mahmeed se ajustaron a las normas y obligaciones internacionales, incluidas la imparcialidad y neutralidad de la autoridad judicial. (Información del Gobierno)

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
					No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. El Sr. Al Mahmeed contrajo la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en abril de 2021, y su salud sigue deteriorándose porque continúa sin recibir atención médica urgente, incluida la fisioterapia prescrita tras una operación. (Información de la fuente)
55/2020	Burundi	No	Ernest Nyabenda y Patrick Nsengiyumva	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
56/2020	Burundi	No	Cadeau Bigirumugisha	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
57/2020	República Bolivariana de Venezuela	Sí	Juan Pablo Saavedra Mejías	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
58/2020	Japón	Sí	Deniz Yengin y Heydar Safari Diman	Detención arbitraria, categorías I, II, IV y V	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
59/2020	Japón	Sí	Carlos Ghosn	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
60/2020	Kuwait	Sí	Maria Lazareva	Detención arbitraria, categorías I y III	Los procedimientos llevados a cabo contra la Sra. Lazareva fueron jurídicamente correctos y se basaron en las órdenes y la supervisión del poder judicial, que es neutral e imparcial y garantiza los derechos de los acusados a un juicio justo. Se facilitaron información complementaria y aclaraciones. (Información del Gobierno)

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
					No se adoptaron medidas para aplicar la opinión. El Gobierno no solo ha ignorado la opinión, sino que ha continuado investigando denuncias maliciosas contra la Sra. Lazareva, con violaciones adicionales y continuas de sus derechos al debido proceso. El Gobierno también ha logrado que se emita una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en su contra. La Sra. Lazareva ha permanecido en la Embajada de la Federación de Rusia en Kuwait desde el 11 de noviembre de 2019. (Información de la fuente)
61/2020	Emiratos Árabes Unidos	No	Amina Mohammed Al Abdouli y Maryam Suliman Al Balushi	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Ambas mujeres siguen detenidas a pesar de haber cumplido sus penas de prisión en noviembre de 2020 y a pesar de la opinión emitida. (Información de la fuente)
62/2020	Congo	No	Benoît Faustin Munene	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
63/2020	Egipto	No	Nour Al-Dien Abd Allah Ali Abdallah	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
64/2020	Gabón	Sí	Brice Laccruche Alihanga, Grégory Laccruche Alihanga, Patrichi Christian Tanasa, Julien Engonga Owono y Geaurge Ndemengane Ekoh	Detención arbitraria, categorías I y III	No se han adoptado medidas para aplicar la opinión. La situación de los cinco detenidos se ha deteriorado, y las condiciones de detención, incluido el aislamiento total durante más de un año, pronto tendrán consecuencias irreversibles para su salud física y mental. (Información de la fuente)

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
65/2020	Cuba	Sí	Roberto de Jesús Quiñones Haces	Detención arbitraria, categorías I, II y III	El Sr. Quiñones fue puesto en libertad tras el cumplimiento de su condena, y no se han adoptado medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
66/2020	Turquía	Sí	Levent Kart	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El Sr. Kart fue puesto en libertad el 17 de septiembre de 2020 a la espera de la apelación. (Información de la fuente)
67/2020	Turquía	Sí	Ahmet Dinçer Sakaoğlu	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
68/2020	Marruecos	Sí	Walid El Batal	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Posteriormente, el 7 de junio de 2021 el Sr. El Batal fue puesto en libertad. (Información de la fuente)
69/2020	Marruecos	No (retraso)	Mourad Zefzafi	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Ninguna
70/2020	Australia	Sí	Sr. Laltu (alias Somrat Morol)	Detención arbitraria, categorías II, IV y V	El Sr. Laltu sigue sometido a detención de inmigrantes. Fue declarado no beneficiario de las obligaciones de Australia en materia de protección y está a la espera del procedimiento de expulsión involuntaria. (Información del Gobierno)
71/2020	Australia	Sí	Mohammad Qais Niazy	Detención arbitraria, categorías IV y V	Ninguna
72/2020	Australia	Sí	Said Mohamed Elmahdy Agueib Attia Farag	Detención arbitraria, categorías II, IV y V	El Sr. Farag fue puesto en libertad con un visado de salida definitivo el 27 de agosto de 2020. (Información de la fuente)

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
73/2020	República Bolivariana de Venezuela	No	Juan Antonio Planchart Márquez	Detención arbitraria, categorías I y III	Se permitió al Sr. Planchart Márquez recibir tratamiento médico, pero sigue detenido. (Información de la fuente)
74/2020	Turquía	Sí	Nermin Yasar	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
75/2020	Qatar	Sí	Muhammad Iqbal	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Todas las medidas adoptadas contra el Sr. Iqbal contaron con la supervisión de la autoridad judicial competente y se ajustaron a la legislación nacional e internacional. Fue puesto en libertad bajo fianza el 14 de mayo de 2020 hasta su condena en virtud de una sentencia judicial firme tras un juicio imparcial. (Información del Gobierno)
76/2020	El Salvador	No ³	José Aquiles Enrique Rais López	Detención arbitraria, categorías I y III	El Sr. Rais López fue puesto en libertad antes de la remisión del caso al Gobierno y vive en el exilio. La orden de detención contra él es ejecutable. La opinión se ha publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Información del Gobierno)
77/2020	Egipto	Sí	Ramy Shaath	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
78/2020	China	Sí	Kai Li	Detención arbitraria, categorías I y III	El Sr. Li sigue detenido. (Información de la fuente)
79/2020	Egipto	No (retraso)	Ahmed Yasser Mahmoud Ahmed Hassan	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
80/2020	Egipto	No	Mohamed Adel Fahmy Ali (conocido como Mohamed Adel)	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Ninguna

³ El 18 de diciembre de 2020, el Gobierno respondió con retraso, tras la aprobación de la opinión.

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
81/2020	Viet Nam	Sí	Ho Van Hai	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El Sr. Ho fue autorizado a salir del país mientras estaba en libertad condicional. (Información de la fuente)
82/2020	China	No	Xu Zhiyong	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
83/2020	Irán (República Islámica del)	Sí	Youcef Nadarkhani	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna
84/2020	Camboya y Turquía	Camboya (no) ⁴ ; Turquía (sí)	Osman Karaca	Detención arbitraria, categorías I, III y V	Ninguna
85/2020	Honduras	No (retraso)	José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz	Detención arbitraria, categorías I, II y III	Ninguna
86/2020	Arabia Saudita	Sí	Jequé Mohammad bin Hassan Al Habib	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	La salud del Sr. Al Habib, que cumple una condena de 12 años de prisión desde julio de 2016, se ha ido deteriorando en la cárcel debido a la falta de atención médica adecuada para los problemas de salud que padece como consecuencia de las torturas sufridas durante su detención. Las autoridades penitenciarias le niegan tratamiento médico desde mayo de 2019. (Información de la fuente)

⁴ El 16 de diciembre de 2020, el Gobierno respondió con retraso, tras la aprobación de la opinión.

<i>Opinión núm.</i>	<i>Países y zonas</i>	<i>Respuesta del Gobierno</i>	<i>Personas afectadas</i>	<i>Opinión</i>	<i>Información de seguimiento recibida</i>
87/2020	Bahrein	Sí	Ali Mahdi Abdulhusain Mohamad Alaiwi, Hasan Asad Jasim Jasim Nesaif, Habib Hasan Habib Yusuf, Ali Ahmed Ali Ahmed Fakhrawi, Mohamed Ahmed Ali Ahmed Fakhrawi y Nooh Abdulla Hasan Ahmed Hasan Al Amroom	Detención arbitraria, categorías I y III	Ninguna
88/2020	India y Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos no (retraso) India (sí)	Christian James Michel	Detención arbitraria, Emiratos Árabes Unidos (categorías I, II y III); Detención arbitraria, India (categoría I)	El Gobierno de la India no ha adoptado ninguna medida para poner en libertad al Sr. Michel, cuya vida peligra debido al brote de la COVID-19. (Información de la fuente)
89/2020	Tayikistán	No	Daler Sharipov	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	El Sr. Sharipov fue puesto en libertad el 28 de enero de 2021 después de cumplir la condena de 1 año que se le había impuesto. No se han adoptado nuevas medidas para aplicar la opinión. (Información de la fuente)
90/2020	Líbano	No	Hassan Al Dika	Detención arbitraria, categorías I y III	En relación con la muerte durante la detención del Sr. Al Dika, el Gobierno confirma que padecía varias enfermedades y falleció el 11 de mayo de 2019. Las condiciones de su detención cumplían las normas nacionales e internacionales. El informe del médico forense fue falsificado y el Sr. Al Dika no murió por secuelas de la tortura. (Información del Gobierno)
91/2020	India	No	Safoora Zargar	Detención arbitraria, categorías I, II y V	Ninguna
92/2020	Arabia Saudita	Sí	Mohammed Essam Al-Faraj	Detención arbitraria, categorías I, II, III y V	Ninguna

3. Procedimiento de seguimiento

13. El cuadro anterior contiene la información recibida por el Grupo de Trabajo hasta el 30 de junio de 2021 de conformidad con el procedimiento de seguimiento adoptado por el Grupo de Trabajo en su 76º período de sesiones, celebrado en agosto de 2016.

14. El Grupo de Trabajo agradece a las fuentes y a los Gobiernos sus respuestas en el contexto de su procedimiento de seguimiento e invita a todas las partes a que cooperen y proporcionen dichas respuestas. Sin embargo, observa que estas respuestas no implican necesariamente la aplicación de sus opiniones. El Grupo de Trabajo alienta a las fuentes y a los Gobiernos a que proporcionen información exhaustiva sobre la aplicación de sus opiniones, en particular sobre la puesta en libertad de las personas que han sido objeto de sus opiniones, así como otra información, como el pago de indemnizaciones o reparaciones, la investigación de presuntas violaciones de los derechos humanos y cualquier otro cambio en la legislación o las prácticas, de conformidad con las recomendaciones formuladas.

4. Puesta en libertad de personas que han sido objeto de opiniones del Grupo de Trabajo

15. El Grupo de Trabajo observa con reconocimiento la información recibida durante el período a que se refiere el informe sobre la puesta en libertad de las siguientes personas que han sido objeto de sus opiniones:

- Mohamed Merza Ali Moosa (opinión núm. 59/2019, Bahrein), puesto en libertad tras una amnistía, y objeto de una sentencia alternativa consistente en trabajar para un fondo benéfico
- Carlos Marrón Colmenares (opinión núm. 80/2019, República Bolivariana de Venezuela), puesto en libertad por orden judicial el 7 de enero de 2020
- Cuatro menores (opinión núm. 65/2019, Egipto), tres fueron puestos en libertad tras ser absueltos; se impuso al cuarto una pena de tres años de prisión y fue puesto en libertad por haber superado el tiempo de encarcelamiento
- José Leyes Justiniano (opinión núm. 61/2019, Estado Plurinacional de Bolivia), puesto en libertad por un juez que encontró infracciones al debido proceso
- Amaya Eva Coppens Zamora (opiniones núms. 43/2019 y 21/2020, Nicaragua), tras su puesta en libertad condicional en junio de 2019 gracias a una ley de amnistía, volvió a ser detenida por otros cargos diferentes, puesta en libertad nuevamente y ha abandonado el país
- Dos menores (opinión núm. 73/2019, Bahrein), puestos en libertad a la espera de juicio y posteriormente condenados a un año de libertad vigilada
- Huyen Thu Thi Tran (opinión núm. 2/2019, Australia), puesta en libertad con un visado transitorio, junto a su hijo de 2 años
- Jamal Talib Abdulhussein (opinión núm. 35/2020, Australia), se le concedió un visado de protección temporal y fue liberado de la detención de inmigrantes
- Said Mohamed Elmahdy Agueib Attia Farag (opinión núm. 72/2020, Australia), puesto en libertad con un visado definitivo
- Levent Kart (opinión núm. 66/2020, Turquía), puesto en libertad a la espera de la resolución del recurso
- Ignace Sossou (opinión núm. 46/2020, Benin), puesto en libertad al término de su condena, que fue reducida en apelación
- Josiel Guía Piloto (opinión núm. 63/2019, Cuba), libertad condicional
- Saman Ahmed Hamad (opinión núm. 22/2020, Hungría), trasladado del centro de tránsito a un centro de acogida abierto

- Roberto Eugenio Marrero Borjas (opinión núm. 75/2019, República Bolivariana de Venezuela), liberado de su detención y en condiciones de viajar internacionalmente para reunirse con su familia
- Carlos Miguel Aristimuño de Gamas (opinión núm. 81/2019, República Bolivariana de Venezuela), puesto en libertad en septiembre de 2020
- Antonia de la Paz Yolanda Turbay Hernando (opinión núm. 44/2020, República Bolivariana de Venezuela), puesta en libertad por indulto presidencial el 31 de agosto de 2020
- Chayapha Chokepornbudsri (opinión núm. 3/2018, Tailandia), puesta en libertad tras la reducción de su condena
- Humberto Rico y Silverio Portal (opinión núm. 4/2020, Cuba), el Sr. Rico fue puesto en libertad en julio de 2019 tras un indulto presidencial y el Sr. Portal fue puesto en libertad el 1 de diciembre de 2020 por motivos de salud
- Imelda Cortez Palacios (opinión núm. 19/2020, El Salvador), puesta en libertad tras un veredicto de no culpabilidad
- Dieciséis personas (opinión núm. 21/2020, Nicaragua) fueron puestas en libertad en virtud de una ley de amnistía, que no eliminó sus antecedentes penales
- Mónica Esparza y Edgar Menchaca (opinión núm. 24/2020, México), puestos en libertad antes de la aprobación de la opinión, tras ser declarados inocentes por el tribunal
- Tito Elia Magoti (opinión núm. 38/2020, República Unida de Tanzania), puesto en libertad tras declararse culpable y pagar una multa
- Ho Van Hai (opinión núm. 81/2020, Viet Nam), se le permitió salir del país mientras estaba en libertad condicional
- Evelyn Beatriz Hernández Cruz y Sara del Rosario Rogel García (opinión núm. 68/2019, El Salvador), la Sra. Hernández fue puesta en libertad condicional y posteriormente absuelta y la Sra. del Rosario fue puesta en libertad condicional
- Messaoud Leftissi (opinión núm. 53/2020, Argelia), puesto en libertad tras ser absuelto por el tribunal de apelación y exonerado de todos los cargos
- Walid El Batal (opinión núm. 68/2020, Marruecos), puesto en libertad tras la reducción de la condena

16. El Grupo de Trabajo expresa su agradecimiento a los Gobiernos que pusieron en libertad a personas que habían sido objeto de sus opiniones. No obstante, lamenta la falta de cooperación de diversos Estados Miembros con respecto a la aplicación de las opiniones e insta a esos Estados a que las apliquen con carácter de urgencia. El Grupo de Trabajo recuerda que mantener detenidas a esas personas constituye una violación continua del derecho a la libertad que las asiste en virtud del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. Respuestas de los Gobiernos en relación con opiniones anteriores

17. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Trabajo recibió respuestas de varios Gobiernos sobre opiniones anteriores.

18. El 17 de enero de 2020, el Gobierno de Camboya rechazó las conclusiones del Grupo de Trabajo contenidas en su opinión núm. 9/2018 sobre Kem Sokha.

19. El 8 de mayo de 2020, el Gobierno de Viet Nam se opuso a la opinión núm. 45/2019, alegando que las conclusiones y juicios del Grupo de Trabajo eran sesgadas y no tenían en cuenta la información oficial facilitada.

20. En una nota verbal de fecha 8 de septiembre de 2020, el Gobierno de la República Unida de Tanzania señaló que ya había facilitado explicaciones exhaustivas y suficientes con respecto al caso de Tito Elia Magoti (opinión núm. 38/2020) mediante su respuesta a una comunicación conjunta (AL TZA 1/2020) de los procedimientos especiales.

21. El 11 de septiembre de 2020, el Gobierno de Kuwait respondió a la opinión núm. 82/2019, y recordó que había informado al Grupo de Trabajo de que Waleed Antoine Moubarak no estaba encarcelado en Kuwait y había salido del país. El Gobierno observó con sorpresa que el Grupo de Trabajo había emitido una opinión sobre la detención arbitraria de una persona que no se encontraba en su territorio.

22. El Gobierno de Kuwait planteó una objeción a la opinión núm. 54/2020 y expresó su preocupación por el hecho de que el Grupo de Trabajo no había tenido en cuenta la información facilitada por el Gobierno, y que su opinión se había basado únicamente en la información de la fuente. El Gobierno también facilitó información complementaria y aclaraciones.

23. En relación con las opiniones núms. 35/2020 y 70/2020, el Gobierno de Australia afirmó que siempre había colaborado de buena fe con el Grupo de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno respetuosamente expresó su desacuerdo con las recomendaciones formuladas en las opiniones.

24. El 30 de noviembre de 2020, el Gobierno de Viet Nam se opuso a la opinión núm. 16/2020 y lamentó que la información proporcionada por Viet Nam sobre Ngô Văn Dũng no se hubiese examinado de forma objetiva. La detención, la investigación, el enjuiciamiento y el procesamiento del Sr. Dũng habían sido necesarios y se habían llevado a cabo de conformidad con las leyes vietnamitas e internacionales.

25. El Gobierno de Marruecos se opuso a la opinión núm. 68/2020 porque utilizaba una redacción y una terminología políticamente sesgadas. El Gobierno señaló que esto excedía el estricto mandato encomendado al Grupo de Trabajo y que las observaciones de Marruecos no se habían tenido en cuenta.

26. El Gobierno del Japón planteó una objeción a la opinión núm. 59/2020 y señaló que contenía errores relativos a la caracterización de los hechos. El Gobierno expresó su intención de seguir dando explicaciones claras para facilitar la correcta comprensión del sistema de justicia penal del Japón.

27. El Gobierno del Japón también planteó una objeción a la opinión núm. 58/2020. El Gobierno señaló que se basaba en errores de caracterización de los hechos en relación con los casos del Sr. Diman y del Sr. Yengin, así como en una clara falta de comprensión del sistema de control de la inmigración y de gestión de la residencia en el Japón.

28. El Gobierno de la Federación de Rusia reiteró su desacuerdo con las opiniones núms. 10/2020 y 23/2020 e insistió en la necesidad de revisar dichas opiniones (véanse los párrs. 29 y 30).

6. Solicitudes de revisión de las opiniones aprobadas

29. El Grupo de Trabajo examinó las solicitudes de revisión de las siguientes opiniones:

- Opinión núm. 31/2018 relativa a Mohamed Al-Bamary (Marruecos)
- Opinión núm. 58/2018 relativa a Ahmed Aliouat (Marruecos)
- Opinión núm. 60/2018 relativa a Mbarek Daoudi (Marruecos)
- Opinión núm. 22/2019, relativa a Ahmad Khaled Mohammed Al Hossan (Arabia Saudita)
- Opinión núm. 23/2019 relativa a Laaroussi Ndor (Marruecos)
- Opinión núm. 67/2019 relativa a un grupo de estudiantes (Marruecos)
- Opinión núm. 78/2019 relativa a Mounir Benabdellah (Marruecos)
- Opinión núm. 10/2020, relativa a 18 personas (Federación de Rusia)
- Opinión núm. 23/2020, relativa a Maksud Ibragimov (Tayikistán y Federación de Rusia)

30. Tras examinar las solicitudes de revisión, el Grupo de Trabajo decidió mantener sus opiniones sobre la base de que ninguna de esas solicitudes cumplía los criterios establecidos en el párrafo 21 de sus métodos de trabajo.

7. Represalias contra personas que han sido objeto de opiniones del Grupo de Trabajo

31. El Grupo de Trabajo observa con grave preocupación que sigue recibiendo información, en particular en el contexto de su procedimiento de seguimiento, sobre represalias contra personas que han sido objeto de un llamamiento urgente o de una opinión, o cuyos casos han dado lugar a una recomendación del Grupo de Trabajo.

32. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo recibió denuncias de represalias contra:

- Walid El Batal (opinión núm. 68/2020, Marruecos)
- Aziz El Ouahidi, Elkantawi Elbeur, Mohammed Dadda y Abdelmoula El Hafidi (opinión núm. 67/2019, Marruecos)

33. En sus resoluciones 12/2 y 24/24, el Consejo de Derechos Humanos instó a los Gobiernos a que impidieran y se abstuvieran de todo acto de intimidación o represalia contra quienes tratasen de cooperar o hubiesen cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos de derechos humanos, o que hubiesen prestado testimonio ante ellos o les hubiesen proporcionado información. El Grupo de Trabajo alienta a los Estados Miembros a que adopten todas las medidas posibles para prevenir las represalias.

8. Llamamientos urgentes

34. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo envió 55 llamamientos urgentes a 27 Gobiernos y 150 cartas de denuncia y otras cartas a 62 Gobiernos y, en dos casos, a otros agentes, en relación con al menos 651 personas identificadas.

35. La lista de países afectados por los llamamientos urgentes es la siguiente: Albania (2), Arabia Saudita (2), Argelia (1), Bahrein (1), Belarús (1), Camerún (3), Canadá (1), China (4), Egipto (4), Emiratos Árabes Unidos (2), Estados Unidos de América (1), Federación de Rusia (1), Filipinas (1), India (1), Irán (República Islámica del) (11), Iraq (3), Malasia (1), Mauritania (1), México (1), Myanmar (1), Nigeria (2), Panamá (1), Turquía (3), Ucrania (1), Uganda (2), Venezuela (República Bolivariana de) (2), Viet Nam (1)⁵.

36. De conformidad con los párrafos 22 a 24 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo, sin hacer juicio alguno sobre la posible arbitrariedad de la privación de libertad, puso en conocimiento de cada uno de los Gobiernos interesados el caso concreto denunciado y los exhortó, a menudo conjuntamente con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, a tomar las medidas necesarias para que se respetaran los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad física de las personas privadas de libertad.

37. En los casos en que se emitieron llamamientos en relación con el estado de salud crítico de una determinada persona o con otras circunstancias concretas, como el incumplimiento de una orden de excarcelación dictada por un tribunal o la aplicación de una opinión anterior en la que se solicitaba la puesta en libertad de una persona, el Grupo de Trabajo pidió que se adoptaran todas las medidas necesarias para que las personas fueran puestas en libertad de manera inmediata. De conformidad con la resolución 5/2 del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo incorporó en sus métodos de trabajo y aplica las directrices del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con los llamamientos urgentes.

38. Durante el período que se examina el Grupo de Trabajo también envió 150 cartas de transmisión de denuncia y otras cartas a otros dos agentes y a 62 Estados, a saber: Arabia Saudita (2 cartas de transmisión de denuncia y otra carta), Argelia (2), Azerbaiyán (1), Bahrein (1), Bangladesh (2), Belarús (5), Bolivia (Estado Plurinacional de) (2), Burundi (2),

⁵ El texto completo de los llamamientos urgentes se podrá consultar en www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/%20CommunicationsreportsSP.aspx.

Camboya (3 cartas de transmisión de denuncia y otra carta), Chad (1), Chile (1), China (7 cartas de transmisión de denuncia y otras 2 cartas), Colombia (4), Comoras (1), Côte d'Ivoire (2), Cuba (1), Egipto (9 cartas de transmisión de denuncia y otra carta), El Salvador (1), Emiratos Árabes Unidos (1 carta de transmisión de denuncia y otra carta), Estados Unidos de América (7), Etiopía (1), Federación de Rusia (5), Filipinas (1 carta de transmisión de denuncia y otra carta), Francia (otra carta), Guinea (1), India (5 cartas de transmisión de denuncia y otra carta), Indonesia (3), Irán (República Islámica del) (6), Iraq (2), Israel (3), Jordania (2), Libia (1), Madagascar (2), Malawi (2), Marruecos (2), México (6), Montenegro (1), Myanmar (2), Níger (1), Nigeria (1), Pakistán (3), Panamá (1), Perú (1), Qatar (1), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (otra carta), República Árabe Siria (1), República Democrática del Congo (1), República Democrática Popular Lao (2), República Unida de Tanzania (1), Rwanda (1), Serbia (1), Tailandia (1), Tayikistán (1), Turkmenistán (2), Turquía (5 cartas de transmisión de denuncia y otra carta), Ucrania (1), Uganda (2), Uzbekistán (1), Venezuela (República Bolivariana de) (3), Viet Nam (4), Zambia (1) y Zimbabwe (1).

39. El Grupo de Trabajo desea expresar su agradecimiento a los Gobiernos que atendieron a sus llamamientos y tomaron medidas para proporcionarle información sobre la situación de las personas afectadas, y en especial a los Gobiernos que las pusieron en libertad. El Grupo de Trabajo recuerda que, en el párrafo 4 f) de su resolución 5/1, el Consejo de Derechos Humanos pidió a todos los Estados que cooperasen y se comprometiesen plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

D. Visitas a los países

1. Solicitudes de visita

40. Durante 2020, el Grupo de Trabajo envió recordatorios de sus solicitudes anteriores para visitar la República Árabe Siria (22 de octubre de 2020) y Libia (22 de octubre de 2020).

2. Respuestas de los Gobiernos a las solicitudes de visitar los países

41. En una nota verbal de fecha 6 de marzo de 2020, la Misión Permanente de Turquía respondió que se invitaba al Grupo de Trabajo a visitar Turquía del 23 al 27 de noviembre de 2020, durante no más de una semana (cinco días hábiles), de conformidad con su práctica habitual. En una nota verbal de fecha 2 de septiembre de 2020, la Misión Permanente informó de que, debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la visita del Grupo de Trabajo se postergaba hasta 2021. El Gobierno señaló que el Grupo de Trabajo había sido invitado a visitar Turquía durante nueve días (cinco días hábiles y los fines de semana anterior y posterior a la visita) en 2021.

42. En una carta de fecha 24 de marzo de 2020, la Misión Permanente de Australia señaló que el Gobierno había solicitado al Grupo de Trabajo que aplazara su visita a Australia, prevista del 25 de mayo al 5 de junio de 2020, debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). El Gobierno de Australia seguía comprometido a facilitar esta visita en un momento oportuno para ambas partes, y afirmó que colaboraría con el Grupo de Trabajo para reprogramar la visita una vez que la pandemia hubiese terminado.

43. En una nota verbal de fecha 10 de diciembre de 2020, la Misión Permanente del Canadá expresó su voluntad de acoger una visita del Grupo de Trabajo cuando las circunstancias lo permitieran.

44. En una nota verbal de fecha 15 de diciembre de 2020, la Misión Permanente de Libia transmitió la aprobación del Gobierno de Libia a la solicitud de visita del Grupo de Trabajo, y observó que al Gobierno le agradaría que el Grupo de Trabajo propusiera fechas y proporcionara detalles sobre la visita a fin de coordinarla con las autoridades interesadas.

III. Cuestiones temáticas

45. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Trabajo examinó las cuestiones temáticas planteadas en su jurisprudencia y práctica.

A. Privación de libertad de los defensores de los derechos humanos

46. En diciembre de 1998, la Asamblea General aprobó por consenso la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos⁶. Reconociendo su importancia, el Grupo de Trabajo instó a los Estados a aplicar sus principios “como demostración de un compromiso real y sincero de respeto de los derechos humanos”⁷. En ese momento, el Grupo de Trabajo había recibido varias comunicaciones sobre “medidas represivas” adoptadas contra personas, y expresó su preocupación por el hecho de que los defensores de los derechos humanos corrieran con frecuencia un grave riesgo de ser detenidos⁸.

47. Aunque las buenas prácticas continúan haciendo efectiva la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos⁹, estos siguen siendo vulnerables a la privación arbitraria de la libertad. En 2020, aproximadamente el 28 % de las opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo se referían a la detención de defensores de los derechos humanos¹⁰. En todos estos casos, el Grupo de Trabajo constató que los defensores de los derechos humanos habían sido detenidos arbitrariamente debido a sus actividades en apoyo de los derechos humanos. Esto constituye una alarmante persecución de miembros de la sociedad civil, activistas, periodistas, blogueros, personas que luchan contra las deficiencias de la gobernanza y otras voces disidentes. En muchos casos, los defensores de los derechos humanos eran objeto de desapariciones forzadas¹¹, muertes sin esclarecer durante la detención¹², tortura y malos tratos¹³, intimidación, acoso y amenazas a su seguridad y a la de sus familiares¹⁴, así como de la prohibición de viajar, la congelación y confiscación de bienes, la revocación de la nacionalidad y la inclusión en listas de terroristas¹⁵. Los abogados que los representan también sufren represalias mediante acusaciones penales, allanamientos de oficinas, vigilancia y separación del caso¹⁶, lo que atenta contra el deber de los Estados de garantizar que los abogados puedan desempeñar sus funciones sin injerencias¹⁷.

48. El Grupo de Trabajo observó con preocupación los intentos de silenciar a los defensores de los derechos humanos condenándolos a largas penas de prisión¹⁸. Varios defensores de los derechos humanos fueron detenidos en virtud de disposiciones imprecisas y excesivamente amplias sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, que otorgaban a las autoridades una gran discrecionalidad para criminalizar sus actividades pacíficas¹⁹. Otros eran acusados de delitos de orden público que supuestamente se producían durante protestas o reuniones pacíficas²⁰. Algunos defensores de los derechos humanos ya

⁶ Resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo.

⁷ E/CN.4/2000/4, resumen ejecutivo y párrafos 65, 66 y 69.

⁸ *Ibid.*

⁹ Véase, por ejemplo, A/HRC/31/55.

¹⁰ Las opiniones aprobadas en 2020 se enumeran en la sección C del presente documento.

¹¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 82/2020, 77/2020, 52/2020, 50/2020, 42/2020, 33/2020, 32/2020, 16/2020 y 11/2020.

¹² Véase la opinión núm. 36/2020.

¹³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 85/2020, 68/2020, 52/2020, 38/2020, 33/2020, 21/2020, 7/2020 y 4/2020.

¹⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 77/2020, 43/2020, 32/2020, 14/2020 y 11/2020.

¹⁵ Véanse las opiniones núms. 77/2020 y 43/2020.

¹⁶ Véanse las opiniones núms. 43/2020 y 42/2020. Véanse también las opiniones núms. 17/2019, 83/2018 y 34/2017.

¹⁷ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9; Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, principios 16 a 22; y A/HRC/45/16, párr. 54.

¹⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 42/2020, 36/2020 y 15/2020.

¹⁹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 91/2020 (declaraciones incendiarias), 89/2020 (fomento de la hostilidad nacional, racial, local o religiosa), 82/2020 y 11/2020 (subversión del poder del Estado); 81/2020 y 15/2020 (propaganda contra el Estado), 80/2020 (difusión de noticias falsas), 43/2020 (incitación a la discordia social), 42/2020 (abuso de poder), 32/2020 (provocación de altercados y problemas); y 16/2020 (perturbación de la seguridad).

²⁰ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 21/2020, 4/2020 y 3/2020.

habían estado en el punto de mira de las autoridades²¹ o eran miembros de un grupo, como los defensores del medio ambiente, cuyo trabajo había sido criminalizado repetidamente por los Estados²², lo que sugería que su detención se basaba en motivos discriminatorios como su “opinión política o de otra índole” o su “condición de defensores de los derechos humanos”²³. Tal como el Grupo de Trabajo ha mantenido sistemáticamente, al privar de libertad a personas por realizar actividades de defensa de los derechos humanos se está vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley, consagrado en los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 2, párrafo 1) y 26 del Pacto²⁴. El Grupo de Trabajo también señala que la privación de libertad es arbitraria cuando constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación, y ha constatado que los defensores de los derechos humanos son un grupo protegido con derecho a la igualdad de protección de la ley en virtud del artículo 26 del Pacto, por lo que se inscriben en la categoría V del Grupo de Trabajo²⁵.

49. La información recibida por el Grupo de Trabajo también sugiere que los defensores de los derechos humanos que pertenecen a grupos marginados, o que tratan de proteger los derechos de otras personas marginadas, corren un riesgo significativo de ser detenidos. Las defensoras de los derechos humanos han sido detenidas y sometidas a riesgos vinculados al género, como amenazas de publicación de imágenes sexuales trucadas, denegación de productos de higiene femenina durante la detención, amenazas de muerte a madres e hijos, agresiones verbales por defender el feminismo y pruebas de virginidad, lo que sugiere la detención por motivos discriminatorios en razón de su género. Este trato pone de manifiesto los riesgos adicionales a los que se enfrentan las defensoras de los derechos humanos cuando son detenidas²⁶. Otros defensores de los derechos humanos han sido detenidos por propugnar la eliminación de la prohibición de que las mujeres conduzcan, por tratar de cambiar las normas restrictivas sobre la tutela masculina, por instar a que se ponga fin al acoso sexual, por manifestarse en contra de la lapidación de mujeres por adulterio, por promover la distribución de productos de higiene gratuitos a las escolares, por asistir a una reunión con motivo del Día Internacional de la Mujer y por proteger los derechos de las mujeres y los niños y su educación²⁷. Asimismo, los defensores de los derechos humanos que trataban de proteger los derechos de los niños con discapacidad, de las personas que vivían con enfermedades transmisibles y de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, *queer* e intersexuales + (LGBTIQ+) han sido detenidos y castigados por su trabajo²⁸.

50. La detención arbitraria de defensores de los derechos humanos es una grave violación de los derechos humanos que se produce en todo el mundo y que los Estados deben abordar con urgencia. En algunos Estados, la detención de defensores de los derechos humanos y otras personas es generalizada, lo que lleva al Grupo de Trabajo a advertir que la vulneración sistemática del derecho a no ser detenido arbitrariamente puede constituir una violación grave del derecho internacional²⁹. Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la reducción de la incidencia de la privación arbitraria de libertad mediante la vigilancia de los lugares de detención, la promoción de la modificación de leyes y

²¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 50/2020 (más de 100 detenciones), 42/2020 (condena anterior por criticar a las autoridades), 21/2020 (opinión anterior del Grupo de Trabajo de que los defensores habían sido detenidos arbitrariamente); 18/2020 (persecución durante más de siete años por defensa de los derechos laborales), 16/2020 (detención anterior por actividades similares) y 4/2020 (detención sin presentar cargos al menos 130 veces).

²² Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 16/2020 (otros miembros de una organización no gubernamental detenidos al mismo tiempo); y 3/2020 (criminalización reiterada de defensores del medio ambiente).

²³ Véase la opinión núm. 45/2016 y A/HRC/36/37, párr. 49.

²⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 50/2020, 42/2020, 38/2020, 33/2020, 32/2020 y 27/2020.

²⁵ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 81/2020. Véase también la opinión núm. 45/2016.

²⁶ Véanse las opiniones núms. 33/2020, 24/2019, 21/2019, 61/2018, 57/2017, 50/2017, 48/2017 y 1/2016.

²⁷ Véanse las opiniones núms. 33/2020, 14/2020, 33/2019, 83/2018, 57/2017, 48/2017 y 1/2016.

²⁸ Véanse las opiniones núms. 32/2020, 11/2020, 57/2017 y 14/2017.

²⁹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 82/2020, 80/2020, 42/2020, 36/2020, 33/2020, 32/2020, 18/2020, 16/2020, 15/2020, 14/2020 y 11/2020.

prácticas, el asesoramiento sobre la aplicación de las normas de derechos humanos y la sensibilización sobre el derecho a la libertad³⁰.

B. Traslados forzosos de personas y prohibición de la detención arbitraria

51. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Trabajo observó un patrón en los casos presentados con arreglo al procedimiento ordinario de comunicaciones³¹ y al procedimiento de comunicaciones urgentes³² por el cual se intentaba expulsar, extraditar o deportar por la fuerza a una persona de un Estado a otro, eludiendo de hecho el proceso de extradición exigido con arreglo al estado de derecho y las salvaguardias contra la detención arbitraria³³.

52. En vista de que estos casos representan casi el 10 % de la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en el marco del procedimiento ordinario de comunicaciones durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Trabajo desea aclarar el derecho internacional de los derechos humanos que debe observarse en esas situaciones.

53. Estos casos han suscitado diversas denuncias, incluidos procedimientos de extradición que se han prolongado y no han concluido del todo³⁴ o no han tenido éxito³⁵, pero que, sin embargo, han conducido a un traslado forzoso de la víctima fuera de la jurisdicción. En algunos casos, las autoridades no habían iniciado el procedimiento de extradición; en cambio, los agentes nacionales detenían a la víctima a petición de las autoridades extranjeras³⁶ o la entregaban a agentes de un Gobierno extranjero³⁷. Las víctimas en estos casos eran trasladadas por la fuerza a aeropuertos, amontonadas en compartimentos de carga de aviones y trasladadas fuera del país³⁸; las detenciones se llevaban a cabo en plena noche, realizadas por un gran número de agentes enmascarados³⁹; se impedía a las víctimas notificar a sus familiares y abogados su paradero⁴⁰ y se las sometía a extensos interrogatorios y obligaba a firmar documentos⁴¹. Además, se mantenía a las víctimas incomunicadas⁴² y hasta eran objeto de desaparición forzada⁴³ antes o después de su traslado forzoso al otro Estado. En algunos casos, estos traslados forzosos habían afectado a un gran número de víctimas trasladadas en operaciones coordinadas⁴⁴, mientras que otros casos habían afectado a familias con hijos, incluidos menores⁴⁵. En algunos casos, las solicitudes de extradición habían sido aprobadas por el Estado que concedía la extradición como un canje *de facto* o la captura y devolución a ese Estado de un detenido de alto perfil⁴⁶.

54. Al examinar estos casos, el Grupo de Trabajo ha recordado sistemáticamente que el derecho internacional relativo a la extradición prevé los procedimientos que deben aplicar los países para devolver a personas a otro país en el que se les incoarán actuaciones penales

³⁰ A/HRC/45/16/Add.2, párr. 87.

³¹ Véanse las opiniones núms. 23/2020, 33/2020, 42/2020, 47/2020, 48/2020, 51/2020, 84/2020 y 88/2020.

³² Véanse, entre otras, las comunicaciones ALB 1/2020, ALB 2/2020 y TUR 3/2020; véanse también AZE 1/2019, KSV 1/2018, TUR 6/2018 y GAB 2/2018. Estas comunicaciones pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

³³ El Grupo de Trabajo señala que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias también está examinando este asunto.

³⁴ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 88/2020.

³⁵ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 23/2020.

³⁶ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 84/2020.

³⁷ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 47/2020 y 42/2020.

³⁸ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 23/2020.

³⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 51/2020.

⁴⁰ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2020.

⁴¹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 88/2020.

⁴² Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 23/2020 y 84/2020. Véase también A/HRC/13/42.

⁴³ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 33/2020 y 42/2020.

⁴⁴ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2020.

⁴⁵ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 51/2020. Véase también la opinión núm. 11/2018.

⁴⁶ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 88/2020.

a fin de garantizar a esas personas la protección de su derecho a un juicio imparcial⁴⁷. Aunque el Grupo de Trabajo no cuestiona el derecho de cada Estado a expulsar a los extranjeros que representen una amenaza para su seguridad nacional⁴⁸, ello no significa que esos extranjeros queden fuera del amparo de la ley⁴⁹. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que los Estados deben velar por que los extranjeros que se hallen legalmente en su territorio solo puedan ser expulsados de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley, y permitirles exponer las razones que los asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente y hacerse representar con tal fin ante ella⁵⁰. Esta obligación también está prevista en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos⁵¹. La expulsión involuntaria de una persona a un tercer Estado sin una audiencia celebrada ante una autoridad judicial en modo alguno se compadece con las debidas garantías procesales.

55. El Grupo de Trabajo destaca que todas las personas tienen derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 3, y 9, párrafos 1 y 4 del Pacto, así como los principios 11, 32 y 37 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión⁵². Asimismo, toda persona tiene derecho a que se le notifiquen los motivos de la detención o privación de libertad y a ser presentada sin demora ante una autoridad judicial⁵³. Los traslados forzados que no respetan los requisitos fundamentales del debido proceso nunca pueden tener una base jurídica y, por lo tanto, siempre se inscribirán en la categoría I del Grupo de Trabajo.

56. El Grupo de Trabajo también observa que esos casos suponen la denegación del derecho a asistencia letrada, lo cual es inherente, desde el punto de vista procesal, al derecho a la libertad y la seguridad de la persona y a la prohibición de la detención arbitraria, en contravención de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, así como de los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y de los principios 1, 5, 7, 8, 21 y 22 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Recuerda que las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento durante su privación de libertad, en particular inmediatamente después del momento de su detención⁵⁴. El Grupo de Trabajo reitera que el acceso a la asistencia jurídica desde el principio de la detención corresponde a todas las personas, incluidos los ciudadanos extranjeros, y es una garantía esencial para que la persona detenida pueda impugnar el fundamento jurídico de su detención⁵⁵.

57. El Grupo de Trabajo observa además la denegación de asistencia consular en estos casos y, destacando la limitada disponibilidad de recursos para las personas en el ámbito internacional, recuerda⁵⁶ que la protección consular resulta valiosa para los extranjeros, que se encuentran en situación de desventaja por no estar familiarizados con la legislación, las costumbres y los idiomas locales.

⁴⁷ Véanse las opiniones núms. 42/2020, párr. 60; 33/2020 párr. 63; 23/2020, párr. 58; 10/2019, párr. 71; y 11/2018, párr. 53.

⁴⁸ Comité de Derechos Humanos, *V. M. R. B c. el Canadá*, comunicación núm. 236/1987, y Comité de Derechos Humanos, *J. R. C. c. Costa Rica*, comunicación núm. 296/1988.

⁴⁹ *Alzery c. Suecia* (CCPR/C/88/D/1416/2005).

⁵⁰ Véase la opinión núm. 23/2020.

⁵¹ Véase la opinión núm. 47/2020.

⁵² Véase también Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

⁵³ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 51/2020.

⁵⁴ Opinión núm. 84/2020, párr. 43. Véanse también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 34; y Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8.

⁵⁵ Opinión núm. 81/2020, párr. 81; véase también A/HRC/45/16, párrs. 50 a 53.

⁵⁶ Opiniones núms. 84/2020, 88/2020 y 47/2020.

58. El Grupo de Trabajo reitera que el derecho a ser informado del derecho a la asistencia consular, establecido en el artículo 36, párrafo 1 b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se aplica a todos los extranjeros detenidos. Esta y otras violaciones de los derechos garantizados en el artículo 36, párrafo 1, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares constituyen vulneraciones graves del derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial, reconocido en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el principio 16, párrafo 2, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión⁵⁷.

59. Además, el Grupo de Trabajo observa que los casos de traslado forzoso han supuesto un desprecio total del principio fundamental de no devolución. El Grupo de Trabajo recuerda que no se debe expulsar a una persona a otro país cuando haya razones fundadas para creer que la vida o la libertad de esa persona estarían en riesgo⁵⁸ o bien que correría peligro de ser sometida a tortura o malos tratos⁵⁹. El riesgo de detención arbitraria en el Estado receptor o en un tercer Estado de tránsito debe figurar entre los elementos que han de tenerse en cuenta⁶⁰.

60. El Grupo de Trabajo recuerda que el Estado que expulsa por la fuerza a una persona de su jurisdicción no puede eximirse de la responsabilidad de lo que le ocurra a esa persona en la jurisdicción a la que ha sido expulsada por la fuerza. Por lo tanto, ha sostenido sistemáticamente que el Estado que ordena la expulsión es plenamente responsable de las violaciones de los derechos humanos de las que sea objeto la persona en el Estado receptor. El Grupo de Trabajo hace un llamamiento a todos los Estados para que se abstengan de realizar traslados forzosos de personas eludiendo el debido proceso establecido por el derecho internacional de los derechos humanos y haciendo caso omiso de las salvaguardias contra la detención arbitraria.

C. Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados

61. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la iniciativa del Canadá de presentar la Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados⁶¹ y su Plan de Acción de Asociación para promover la Declaración, respaldada hasta ahora por 63 Estados. El Grupo de Trabajo recuerda su grave preocupación por la detención de ciudadanos extranjeros y sus recomendaciones para que se preste una asistencia consular adecuada y rápida como salvaguardia esencial contra la detención arbitraria⁶².

62. La Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados tiene por objeto promover la prohibición absoluta de la detención arbitraria prevista en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto, sobre la

⁵⁷ Véanse las resoluciones de la Asamblea General 72/149, párr. 32; 72/179, párr. 4 k); 73/175, párr. 7 b); 74/166, párr. 17 g); 74/167, párr. 13; y 74/168, párr. 6 j); así como las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 42/24, párr. 5; y 40/20, párr. 2 j). Véanse también la regla 62, párr. 1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); el art. 10 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven; y los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, directriz 21.

⁵⁸ A/HRC/4/40, párrs. 44 y 45.

⁵⁹ Véanse las opiniones núms. 23/2020, 51/2020 y 84/2020.

⁶⁰ Véase la opinión núm. 42/2020.

⁶¹ Puede consultarse en www.international.gc.ca/news-nouvelles/assets/pdfs/arbitrary_detention-detention_arbitraire-declaration-en.pdf.

⁶² Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 89/2017, 45/2017, 7/2017, 56/2016, 53/2016 y 28/2016. Véase también A/HRC/39/45, párrs. 50 a 58.

base del carácter universal⁶³ y consuetudinario de esta prohibición como no derogable⁶⁴. La prohibición mundial de la detención arbitraria es una clara muestra de su carácter universalmente vinculante en virtud del derecho internacional consuetudinario⁶⁵, que hace inadmisibles cualquier excepción⁶⁶.

63. La Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados se presentó el 15 de febrero de 2021 en Ottawa; posteriormente, el 5 de mayo de 2021, se anunció su Plan de Acción de Asociación, con miras a promover su difusión y aplicación. Sus objetivos y propósitos están estrechamente relacionados con las preocupaciones expresadas por el Grupo de Trabajo en el pasado⁶⁷. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo encomia esta iniciativa que surge del gran número de casos en los que se detiene a ciudadanos extranjeros en un país como un medio para ejercer presión en las relaciones con los Estados de su nacionalidad, y está dispuesto, en el marco de su mandato, a apoyar el Plan de Acción de Asociación y a colaborar con todos los Estados que lo respalden.

IV. Conclusiones

64. En 2020, el Grupo de Trabajo prosiguió su labor, en las circunstancias extraordinarias de la pandemia mundial, para abordar el gran número de comunicaciones recibidas, entre otros medios a través de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Se estableció como prioridad la aprobación de opiniones, lo que dio lugar a 92 opiniones aprobadas, relativas a 221 personas en 47 países.

65. El Grupo de Trabajo observa con preocupación la tasa de respuesta de los Estados en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones, dado que en 2020 los Estados respondieron oportunamente a las comunicaciones y solicitudes de información del Grupo de Trabajo en aproximadamente el 53 % de los casos en que este aprobó una opinión.

66. El Grupo de Trabajo ha tomado nota de un aumento en la cantidad de respuestas recibidas en el contexto de su procedimiento de seguimiento, tanto de fuentes como de Gobiernos, en comparación con el año anterior, ya que en 2020 recibió respuestas en aproximadamente el 58 % de los casos. Lamentablemente, el Grupo de Trabajo observa que el aumento de la tasa de respuesta no implica necesariamente un mayor grado de aplicación de las opiniones.

67. Aunque el Grupo de Trabajo sigue respondiendo al mayor número posible de solicitudes de intervención y tramitando los casos de manera puntual y eficiente, de conformidad con el párrafo 15 de la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, continúa enfrentándose a una acumulación constante de casos atrasados.

68. Durante el período sobre el que se informa, el Grupo de Trabajo siguió estudiando diversas cuestiones temáticas para ayudar a las partes interesadas a prevenir las detenciones arbitrarias. Ello incluyó la formulación de una deliberación, la elaboración en detalle de las esferas temáticas del presente informe y la finalización del estudio de la detención arbitraria en relación con las políticas de fiscalización de drogas.

V. Recomendaciones

69. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a que aumenten su cooperación en lo que respecta a las respuestas en el marco del procedimiento ordinario de

⁶³ Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7; Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 6; Carta Árabe de Derechos Humanos, art. 14; y Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), art. 5. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 2.

⁶⁴ E/CN.4/2002/77, párr. 60 a); y A/HRC/42/39/Add.1, párr. 65.

⁶⁵ A/HRC/22/44.

⁶⁶ *Ibid.*, párrs. 43 a 50.

⁶⁷ Véase A/HRC/39/45, párrs. 50 a 58; y deliberación revisada núm. 5 (A/HRC/39/45, anexo).

comunicaciones y de otro tipo, informando mediante el procedimiento de seguimiento de la aplicación de las opiniones del Grupo de Trabajo (entre otras cosas sobre la facilitación de recursos y reparaciones adecuados a las víctimas de la detención arbitraria) y respondiendo positivamente a las solicitudes de visitas a los países.

70. El Grupo de Trabajo alienta a los Estados a dar pleno efecto a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos garantizando que estos no sean privados de su libertad como consecuencia de sus actividades. Para ello es necesario poner fin a las prácticas que silencian a los defensores de los derechos humanos por su trabajo, como las largas penas de prisión, la detención en virtud de leyes imprecisas y excesivamente amplias, y la persecución reiterada de quienes protegen los derechos de los demás, especialmente de los defensores que actúan en nombre de grupos marginados o que pertenecen a ellos.

71. El Grupo de Trabajo también alienta a los Estados a que ofrezcan todas las garantías procesales, en particular el derecho a la representación letrada y el derecho a impugnar la legalidad de la detención, de todas las personas que vayan a ser expulsadas o extraditadas de su jurisdicción, y a que se aseguren de que dichas expulsiones o extradiciones no den lugar a una privación de libertad arbitraria.

72. Al tiempo que reitera su grave preocupación por la detención de ciudadanos extranjeros en un Estado en circunstancias en las que su nacionalidad extranjera ha sido motivo de su privación de libertad, el Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la adopción de la Declaración contra la Detención Arbitraria en las Relaciones entre Estados y exhorta a todos los Estados a que hagan suya la Declaración y adopten las medidas necesarias para aplicarla en la práctica junto con su Plan de Acción de Asociación.

73. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a que sigan esforzándose por cerrar la brecha de aplicación entre las normas internacionales y las realidades a las que se enfrentan las mujeres privadas de libertad, incorporando la orientación proporcionada en su deliberación núm. 12 en las leyes, políticas y prácticas nacionales. Debe darse prioridad a las alternativas a la detención de las mujeres, garantizando que no sean detenidas por motivos discriminatorios, proporcionando instalaciones de detención separadas y apropiadas para las mujeres detenidas, y abordando las esferas de preocupación específicas señaladas en la deliberación núm. 12 en todos los contextos de detención.

Annex

Deliberation No. 12 on women deprived of their liberty

I. Introduction

1. With the recent 10th anniversary of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the ‘Bangkok Rules’), the Working Group is of the view that it is an opportune time to consider and reflect upon the unique challenges that face women¹ deprived of their liberty.

2. The Bangkok Rules seek to address the gender-specific needs of women in contact with the criminal justice system, both in relation to non-custodial alternatives to detention for women offenders and the conditions of detention for women prisoners.

3. Regrettably, there remains a significant implementation gap between the norms contained in such international standards² and the lived experience of women deprived of their liberty. The Working Group remains concerned that women continue to be arbitrarily deprived of their liberty in violation of their human rights, particularly in circumstances where they are detained directly or indirectly because of their sex or gender, or where their gender-specific needs are not taken into account.

4. Although there has been increased engagement by women with the Working Group’s mandate in recent years,³ women continue to be underrepresented in the opinions of the Working Group. As of 2019, only 8 per cent of the individuals whose situations have been considered in the Working Group’s opinions since its establishment were identifiably women. The Working Group urges women and other stakeholders to continue bringing situations involving the arbitrary deprivation of liberty of women to the attention of the Working Group as appropriate. The Working Group is conscious of the different challenges experienced by women deprived of their liberty and that such detention may occur in different settings, be it the criminal justice context or healthcare or other settings. The Working Group will continue to devote attention to the various contexts in which women are detained during its country visits.

5. The present deliberation considers the gender-specific dimensions of arbitrary detention and provides guidance to assist States and other stakeholders to prevent and address arbitrary detention of women in the criminal justice system, immigration detention, administrative detention, healthcare situations and certain private settings.

6. This deliberation recognizes that not all women experience deprivation of liberty in the same manner and it is therefore necessary to consider the disparate experience of women who already experience disadvantage, including women with disabilities, older women, indigenous women, women affected by extreme poverty, homeless women, women sex workers, women who use drugs, non-national women, including migrants, asylum seekers and refugees, lesbian, bisexual, transgender and gender diverse women and intersex persons,⁴ women human rights defenders and activists and women belonging to national or ethnic, cultural, religious or linguistic minorities, amongst others. In particular, the Working Group

¹ For the purposes of this Deliberation, references to women should be read to include women and girls.

² See also the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the ‘Nelson Mandela Rules’), A/RES/70/175, rules 11 (a), 28, 45 (2), 48 (2), 58 (2), 81; United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the ‘Beijing Rules’), A/RES/40/33, rule 26.4.

³ A/HRC/45/16, para. 49.

⁴ A/HRC/36/37, para. 46; A/HRC/30/37, annex, para. 8; Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies (A/HRC/45/16, annex II), para. 27; Human Rights Committee, general comment No. 35, para. 3.

recalls that women who experience multiple and intersecting forms of discrimination are at higher risk of being deprived of their liberty.⁵

II. Alternatives to detention

7. While women constitute a minority of the prison population, there has been a considerable growth in the female prison population worldwide,⁶ at a significantly disproportionate rate to that of men. In the last twenty years, the number of women and girls in prison has increased by approximately 53 per cent, while the male population has increased by approximately 20 per cent.

8. According to international human rights law, personal liberty is the principle, and detention should be the exception rather than the rule.⁷ States should consider gender-sensitive alternatives to detention for women,⁸ and make those alternatives available to women on an equal basis with men.⁹ The right to challenge the legality of detention, including the right to seek alternatives to detention, belongs equally to women in all settings where women are deprived of their liberty. In order to make this right a reality, it is essential that women are informed of and afforded their right to legal assistance of their choice at any time during their detention, including immediately after their apprehension.¹⁰

9. States should ensure the availability of non-custodial measures at all stages of the criminal justice process, including diversion, pretrial and sentencing alternatives. The right to equality before the law requires that judicial practices be gender-sensitive and not blind to contextual factors that may be relevant to a woman's offending, including any history of gender-based violence, any caregiving responsibilities that women may have and other compounding vulnerabilities.¹¹ Non-custodial sentences for pregnant women and women with dependent children should be given priority where appropriate, with the best interests of the child as a primary consideration.¹² Alternatives to detention must also be made available on a non-discriminatory basis so that, for example, electronic monitoring devices (such as bracelets or tagging) are publicly funded and available to all women regardless of their ability to pay for such alternatives.¹³

10. States must also consider alternatives to detention in the context of immigration detention. This may include measures such as reporting at regular intervals to the authorities, community-based solutions, release on bail or other securities, or stay in open centres or at a designated place.¹⁴ States must ensure that any such measures are not in themselves discriminatory, and are not combined with conditions that make release impracticable or inaccessible for women migrants, refugees or asylum seekers,¹⁵ such as excessive bond amounts.¹⁶ Similarly, alternatives to detention, particularly the provision of care in the community, should be prioritized for women with disabilities, including psychosocial, intellectual and other disabilities, rather than institutional confinement.¹⁷

⁵ A/HRC/41/33, para. 16.

⁶ It has been estimated that women represent between 2 and 9 per cent of the total prison population worldwide, see A/68/340, para. 1; Roy Walmsley, *World Female Imprisonment List* (Institute for Criminal Policy Research, 4th edn, 2017), p. 2.

⁷ A/HRC/27/48/Add.5, para. 79; A/HRC/19/57, paras. 48–58.

⁸ Bangkok Rules, rules 57–63; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, para. 48.

⁹ Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, A/CONF.87/14/Rev.1, Resolution. 9, Specific needs of women prisoners, para. 2.

¹⁰ A/HRC/30/37, annex, paras. 12–15, 67–71.

¹¹ Bangkok Rules, rules 57–63.

¹² Convention on the Rights of the Child, art. 3 (1); Bangkok Rules, rules 64; UN Guidelines for the Alternative Care of Children, A/RES/64/142, para. 48; Human Rights Council Resolution 10/2, para. 13. See also Nelson Mandela Rules, rule 29.

¹³ A/HRC/39/45/Add.1, para. 38; A/HRC/45/16, para. 58.

¹⁴ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 17.

¹⁵ *Ibid.*, para. 17; A/HRC/36/37/Add.2, paras. 28, 30.

¹⁶ A/HRC/36/37/Add.2, para. 28.

¹⁷ A/HRC/39/45/Add.2, paras. 48–50, 60–64, 86(c), 89; A/HRC/41/33, paras. 44, 80(d), 83(d).

11. States should consider, in particular, measures to ensure that detention does not result in the unnecessary separation of women from their children,¹⁸ as this may violate the right to protection of the family¹⁹ and the rights of children not to be separated from their parents against their will.²⁰

III. Deprivation of liberty of women on discriminatory grounds

12. The Working Group regards deprivation of liberty as arbitrary when it constitutes a violation of international law on the grounds of discrimination based on birth, national, ethnic or social origin, language, religion, economic condition, political or other opinion, gender, sexual orientation, disability, or any other status, that aims towards or can result in ignoring the equality of human beings.²¹ These prohibited grounds of discrimination are non-exhaustive.²²

13. Accordingly, the arrest or detention of women on the basis of their sex or gender is *prima facie* discriminatory, in violation of articles 2 and 7 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 2 (1), 3 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights (the ‘Covenant’), and therefore constitutes arbitrary detention.²³

14. As women often experience multiple and intersecting forms of discrimination²⁴ they may be particularly vulnerable to being arrested or detained on the basis of discriminatory grounds.²⁵ States must address and take into account the situation of women who face particular discrimination which may lead to their arbitrary detention, including, but not limited to, girls; women with disabilities, including psychosocial and intellectual disabilities; lesbian, bisexual, transgender women and intersex people; non-nationals, including migrants regardless of their migration status, refugees and asylum seekers, internally displaced women, stateless women and trafficked women or women at risk of being trafficked; women accused or convicted of a crime; women who have or are suspected to have engaged in the preparation, commission or instigation of acts of terrorism; women drug users; women with dementia; women human rights defenders and activists; older women; women living with HIV/AIDS and other serious communicable or chronic diseases; indigenous women; sex workers; minorities as based on national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity, and women who are targeted for violating traditional gender stereotypes and norms (e.g. for honour-related offences).²⁶

15. In determining whether a woman has been arbitrarily detained on the basis of discriminatory grounds, relevant factors to consider may include whether:

- (a) the deprivation of liberty was part of a pattern of persecution against the detained woman (e.g. a woman was targeted on multiple occasions through previous detention, acts of violence or threats);²⁷
- (b) other persons with similarly distinguishing characteristics have also been persecuted;

¹⁸ Bangkok Rules, rule 58; Opinion No. 75/2017, paras. 58, 63.

¹⁹ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 23; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 10.

²⁰ Convention on the Rights of the Child, art. 9; A/HRC/20/24, para. 40.

²¹ A/HRC/36/38, para. 8 (e).

²² The Working Group may determine that an individual or group has been deprived of their liberty on the grounds of discrimination on the basis of “any other status”; see, e.g. Opinion No. 45/2016, para. 44.

²³ See, e.g. Opinions No. 33/2020; No. 61/2018; No. 1/2016.

²⁴ See, e.g. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, para. 8.

²⁵ See, e.g. Opinion No. 1/2016, para. 38.

²⁶ A/HRC/30/37, annex, para. 8; A/HRC/36/37, para. 46.

²⁷ See, e.g. Opinion No. 61/2018, para. 72.

(c) the authorities have made statements to, or conducted themselves toward, the detained woman in a manner that indicates a discriminatory attitude (e.g. female detainees threatened with rape or forced to undergo virginity testing);²⁸

(d) the context suggests that the authorities have detained a woman on discriminatory grounds or to prevent them from exercising their human rights (e.g. women human rights defenders detained after expressing their political opinions);²⁹ and

(e) the alleged conduct for which the woman is detained is only a criminal offence for members of her group (e.g. criminalization of abortion).³⁰

16. The prohibition of detention on discriminatory grounds includes both *de jure* and *de facto* discrimination.

17. Women must not be deprived of their liberty on the basis of laws which are *de jure* discriminatory, such as laws which solely or disproportionately affect women, including laws which directly target women in relation to their sex or gender, or which are based upon traditional gender stereotypes and norms.³¹ Further, laws which criminalize forms of behaviour that are not criminalized or punished as harshly if they are performed by men or forms of behaviour that can be performed only by women are *prima facie* discriminatory.³² This includes offences related to the exercise of reproductive rights, such as abortion, and certain sexual and/or “honour”-related offences such as adultery and prostitution.³³ In some circumstances, detention pursuant to discriminatory laws may constitute arbitrary detention on the grounds that the law violates international human rights standards and consequently the detention lacks a legal basis.³⁴

18. States must urgently review their legislative frameworks and amend or repeal any such laws that lead to the discriminatory deprivation of liberty of women.³⁵

19. States must ensure that women are not subject to *de facto* discrimination resulting in the deprivation of their liberty. Laws, policies and practices must not be applied in such a manner so as to result in or have the effect of women being deprived of their liberty directly or indirectly because of their sex or gender.³⁶ Accordingly States should review legislation, charging practices, arrest procedures and profiling practices to ensure that they do not discriminate against women. For example, ostensibly gender-neutral laws must not be applied or enforced in a manner which disproportionately impacts women,³⁷ or which targets or profiles particular women because of their sex, gender or other protected characteristics.³⁸ In addition, States must take steps to eliminate gender stereotyping of women in the criminal justice system, and ensure that women are not detained on the basis of non-conformity with gender stereotypes or due to harmful and patriarchal cultural norms.³⁹

²⁸ See, e.g. Opinion No. 1/2016, para. 37.

²⁹ See, e.g. Opinion No. 24/2015, para. 44.

³⁰ See, e.g. Opinions No. 19/2020, para. 73; No. 68/2019, para. 115.

³¹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, paras. 21–22.

³² Ibid, paras. 47, 51 (l).

³³ See *infra* paras. 66–68.

³⁴ A/HRC/36/38, para. 8 (a); see Opinion No. 42/2012, para. 29 (even when the arrest and detention of a person is carried out in conformity with national legislation, the Working Group is mandated to ensure that the detention is also consistent with international human rights law); see generally Opinions No. 4/2019, para. 49; No. 69/2019, para. 21; No. 40/2018, para. 45; No. 1/2018, paras. 60, 65; No. 43/2017, para. 34; No. 14/2017, para. 49; Human Rights Committee, General comment No. 35, paras. 11–12.

³⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 2; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, para. 21.

³⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 28, para. 5.

³⁷ See, e.g. A/HRC/45/16/Add.2, para. 43.

³⁸ See, e.g. Opinion No. 61/2018, para. 72.

³⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, paras. 7, 8, 26.

20. The prohibition of non-discrimination requires States to take positive measures in order to achieve the substantive equality of women.⁴⁰ In addition, States must take steps to provide additional protection to women who may be at risk of arbitrary deprivation of their liberty. A failure by a State to take such measures may itself constitute discrimination, leading to arbitrary deprivation of liberty.

IV. Conditions of detention

21. The Working Group urges all States to implement full observance of the Bangkok Rules and the Nelson Mandela Rules. To this end, States must ensure that dedicated and appropriate detention facilities are available to accommodate female detainees, including pre-trial detention facilities and prisons for convicted women.

22. Poor, and often inhumane, conditions of detention have been reported around the world affecting both women and men, including overcrowding, unsanitary conditions, lack of food and water, inadequate healthcare and limited contact with family and support networks. The Working Group considers that in certain circumstances, conditions of detention may severely and adversely affect the ability of women to challenge the legality of their detention and to participate in their own defence, in violation of the right to the equality of arms and to a fair trial.⁴¹ Moreover, such detention conditions are contrary to international human rights law and raise issues of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.⁴²

23. The Working Group recognizes that women experience additional and different obstacles relating to conditions of detention based on their sex or gender. In this regard, a number of recurring issues of concern regarding the conditions of detention of women have come to the attention of the Working Group, including:

- (a) Torture or cruel, inhuman or degrading treatment of female detainees,⁴³ including rape and sexual assault (and threats thereof) during interrogation and detention;⁴⁴
- (b) Lack of dedicated detention facilities for female detainees⁴⁵ and failure to provide separate facilities for female and male detainees;⁴⁶
- (c) Separation of women and children in immigration facilities;⁴⁷

⁴⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 2; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 28, paras. 9, 16, 24.

⁴¹ Universal Declaration of Human Rights, arts. 10, 11 (1); International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 9, 14; see Opinions No. 74/2020, para. 74 (ill-treatment, including detention in an overcrowded cell, sleep deprivation, lack of clean drinking water and lack of access to a shower); No. 61/2020, para. 84 (physical and psychological suffering); No. 52/2018, para. 79 (j) (overcrowded, unhygienic and inhuman conditions); No. 47/2017, para. 28 (torture, including beatings and rape); No. 29/2017, para. 63 (severe beating and being brought to court on a stretcher); E/CN.4/2004/3/Add.3, para. 33.

⁴² Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, arts. 1 (1), 16 (1). See generally CAT/OP/27/1.

⁴³ Nelson Mandela Rules, rule 1; Universal Declaration of Human Rights, art. 5; International Covenant on Civil and Political Rights, art. 7; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, arts. 2 (1), 16 (1); see generally CAT/OP/27/1; Opinions No. 61/2020, para. 84; No. 33/2020, para. 90; No. 21/2019, para. 44.

⁴⁴ Opinions No. 61/2020, para. 82; No. 33/2020, para. 90; No. 31/2019, para. 38; No. 21/2019, para. 29; No. 33/2017, para. 90; No. 1/2016, para. 37. See further, A/68/340, paras. 34–38; CEDAW/C/ETH/CO/8, paras. 55–56; CAT/OP/27/1, para. 25.

⁴⁵ A/HRC/42/39/Add.1, paras. 47–50; CAT/OP/27/1, paras. 29, 39.

⁴⁶ Nelson Mandela Rules, rule 11 (a); Opinion No. 21/2019, para. 48. See CEDAW/C/ETH/CO/8, paras. 55–56; CAT/OP/27/1, para. 43.

⁴⁷ Bangkok Rules, rules 52, 58; UN News, ‘Children separated at border, suffering alarming and prolonged effects: UN rights experts’, 2018, <news.un.org/en/story/2018/10/1023712>.

(d) Failure to respect the hygiene needs of women, including inadequate facilities that do not protect women's privacy,⁴⁸ and failure to provide personal hygiene items;⁴⁹

(e) Inadequate mental and physical health care,⁵⁰ including failure to consider women's specific health needs and failure to provide adequate prenatal and postnatal care and treatment to women and children;⁵¹

(f) Searches that are used to harass, intimidate or unnecessarily intrude upon women's privacy and/or violate their dignity or physical autonomy, integrity or security;⁵² and

(g) Failures to protect women from, and investigate, harassment and abuse from staff and detainees.⁵³

V. Particular areas of concern

Intersectionality and causes of detention of women

24. Women are at risk of arbitrary detention not solely due to their sex and gender, but also due to discrimination inherently linked to other intersecting factors, which may increase their likelihood of coming into contact with the criminal justice system and which can affect the likelihood and length of their incarceration.⁵⁴

25. The disproportionate incarceration of women for crimes related to poverty, such as theft, fraud, inability to pay debts and other offences related to homelessness or poor living conditions,⁵⁵ constitutes discrimination on the basis of economic condition or any other status. States must repeal or amend any laws, policies or practices which result in the discriminatory detention of women living in poverty,⁵⁶ and ensure that women living in poverty are not profiled or targeted for detention.

26. Women's poverty may also result in a lack of due process and procedural safeguards which may violate the right to fair trial. States must ensure that women without adequate means are able to access effective legal representation at no cost.⁵⁷ In addition, women must not be imprisoned in pre-trial detention solely by reason of an inability to post bail, in particular in relation to low-level offences,⁵⁸ due to an inability to pay a fine,⁵⁹ or inability to

⁴⁸ Nelson Mandela Rules, rules 15–18; Bangkok Rules, rule 5; A/HRC/36/37/Add.1, para. 43; Opinion No. 61/2020, para. 83; A/68/340, para. 42.

⁴⁹ Bangkok Rules, rule 5; Opinion No. 57/2017, para. 48; Joint Amicus Curiae Submission by the Working Group on Discrimination against Women and Girls and the Working Group on Arbitrary Detention on the case of *Joy Moses & 5 Ors v The Minister, FCT & 13 Ors* (Federal High Court of Nigeria), p. 6; A/HRC/22/44/Add.2, para. 96; A/HRC/42/47/Add.1, para. 46; CEDAW/C/MDA/CO/6, paras. 40–41; CAT/OP/27/1, para. 28; AL EGY 16/2020.

⁵⁰ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 10 (1); Nelson Mandela Rules, rules 24–35; Bangkok Rules, rules 10–18; Opinions No. 61/2020, para. 92; No. 21/2019, para. 48; No. 48/2017, para. 51; A/HRC/36/37/Add.1, para. 43. See also CEDAW/C/BLR/CO/8, para. 44; CEDAW/C/GBR/CO/8, paras. 57–58.

⁵¹ Nelson Mandela Rules, rule 28; Bangkok Rules, rule 48; Opinion No. 35/2016, paras. 19–20; A/68/340, paras. 44–50; CEDAW/C/KHM/CO/6, paras. 44–45; CAT/OP/27/1, para. 28; AL EGY 16/2020.

⁵² Nelson Mandela Rules, rules 51–52; Bangkok Rules, rules 19–21; Opinion No. 61/2020, para. 83; CEDAW/C/49/D/23/2009, para. 2.7; A/68/340, para. 43; CAT/OP/27/1, para. 27; AL EGY 16/2020.

⁵³ Opinion No. 61/2020, para. 22; CEDAW/C/BLR/CO/8, para. 44; CEDAW/C/ZWE/CO/6, paras. 45–46.

⁵⁴ A/HRC/39/45/Add.2, para. 66; A/HRC/41/33, paras. 34, 51–53.

⁵⁵ A/HRC/39/45/Add.2, paras. 60–64, 89(a), 90(a); A/HRC/41/33, para. 52.

⁵⁶ A/HRC/41/33, para. 81 (d).

⁵⁷ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 14 (3) (d); Human Rights Committee, General comment No. 32, para. 10; A/HRC/30/37, annex, paras. 12–15, 67–61; Opinion No. 57/2012, para. 22.

⁵⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, paras. 47 (d), 51 (p).

⁵⁹ See, e.g. Opinion No. 10/2010.

pay a bond in relation to administrative or immigration detention.⁶⁰ In particular, States should implement measures to ensure that women's income and capacity to pay should be taken into account in setting bail, bonds and fines, with such amounts limited to that which is necessary to secure the woman's appearance or to protect the community.⁶¹ Additionally, the lower social and educational status of women may in some cases lead to the violation of their fair trial rights (e.g. women may be less likely to understand the charges or the legal procedure, or less likely to be properly consulted by defence counsel owing to their status in society or through having a male family member acting on their behalf).

27. The Working Group is concerned by the discriminatory application of public order offences such as loitering, vagrancy, public nuisance and public indecency, which are often applied to women experiencing poverty⁶² and women sex workers.⁶³ To the extent that such laws are so vague or broad so as to breach the principle of legal certainty, the detention of women under such laws may lack a legal basis, and therefore constitute arbitrary detention.⁶⁴

28. In this connection, women sex workers are routinely targeted by law enforcement and subject to arbitrary arrest and detention, which is ultimately premised upon the social control of women's morality and sexuality.⁶⁵ The direct criminalization of sex work, or the indirect targeting of sex workers for public order offences such as vagrancy, is discriminatory and a violation of international law.⁶⁶ States must repeal laws which directly or effectively criminalize sex work, and cease any practices which target, arrest and detain women in relation to sex work.⁶⁷

29. Criminal and administrative detention as a result of drug control laws and policies disproportionately affects women⁶⁸ and can constitute arbitrary detention.⁶⁹ Women have high rates of imprisonment for drug related offences, with approximately 35 per cent of women in prison incarcerated for drug offences in comparison to only 19 per cent of male prisoners.⁷⁰ The causes of women's interaction with the criminal justice system in relation to drug offences are complex, and are often linked to other factors such as poverty and coercion,⁷¹ and may also reflect systemic gender inequality in society more broadly.

Detention of women in relation to reproductive health

30. The Working Group remains deeply concerned regarding the continued practice of detaining women in relation to the exercise of their fundamental reproductive rights.

31. The criminalization of forms of behaviour that can only be performed by women is *prima facie* discriminatory, and therefore laws which criminalize conduct related to the consequences of a lack of access to and enjoyment of the highest attainable standard of health,

⁶⁰ A/HRC/36/37/Add.2, paras. 51–53, 93 (a).

⁶¹ A/HRC/36/37/Add.2, para. 93 (a); E/CN.4/2002/77, para. 60 (b) and (c).

⁶² A/HRC/39/45/Add.2, paras. 60–64, 89 (a), 90 (a).

⁶³ Joint Amicus Curiae Submission by the Working Group on Discrimination against Women and Girls and the Working Group on Arbitrary Detention on the case of *Joy Moses & 5 Ors v The Minister, FCT & 13 Ors* (Federal High Court of Nigeria), p. 8; A/HRC/41/33, para. 36.

⁶⁴ Joint Amicus Curiae Submission by the Working Group on Discrimination against Women and Girls and the Working Group on Arbitrary Detention on the case of *Joy Moses & 5 Ors v The Minister, FCT & 13 Ors* (Federal High Court of Nigeria), para. 12.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 8.

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 8–10; A/HRC/39/45/Add.2, paras. 64, 90(a); Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, para. 29 (c) (i).

⁶⁷ Joint Amicus Curiae Submission by the Working Group on Discrimination against Women and Girls and the Working Group on Arbitrary Detention on the case of *Joy Moses & 5 Ors v The Minister, FCT & 13 Ors* (Federal High Court of Nigeria), pp.18–19; A/HRC/41/33, para. 80 (c).

⁶⁸ A/HRC/41/33, para. 32.

⁶⁹ A/HRC/30/36, paras. 57–62.

⁷⁰ UNODC, 'Women and drugs: Drug use, drug supply and their consequences', 2018, p. 9.

⁷¹ A/68/340, paras. 10–11.

or that criminalize the exercise of women's reproductive rights must be considered as *prima facie* discriminatory.⁷²

32. Many States continue to prohibit or severely restrict women's access to safe services for the termination of pregnancy, exposing women to criminal liability and associated detention for seeking or obtaining abortions, with no exceptions or allowance for extenuating circumstances.⁷³ Such laws reflect a form of gender stereotyping, instrumentalizing women's bodies, and in effect penalizing women for conduct which contravenes socialized gender roles and expectations.⁷⁴

33. Laws which criminalize or severely restrict women's access to abortion are not only *prima facie* discriminatory, but may also constitute gender-based violence⁷⁵ and may violate a number of other provisions of international human rights law, including a woman's right to life⁷⁶ and the prohibition against torture or cruel, inhuman or degrading treatment.⁷⁷

34. The Working Group is particularly concerned about the practice, in some States and regions, of criminalizing women who suffer obstetric emergencies.⁷⁸ Laws which criminalize miscarriages and other pregnancy complications which result in the death of the foetus are *prima facie* discriminatory and reflect systemic gender discrimination in which women are often expected to place the potential life resulting from their pregnancy above their own life.⁷⁹ The detention of women in these circumstances is unnecessary, disproportionate and serves no legitimate purpose.⁸⁰ Obstetric emergencies should be treated as a medical emergency with appropriate physical and mental healthcare provided to women as a matter of urgency.

35. The detention of women in relation to obstetric emergencies also reflects structural problems surrounding women's ability to access and enjoy the highest attainable standard of health. In particular, restrictive abortion laws and policies disproportionately impact upon marginalized and disadvantaged women, particularly women living in poverty,⁸¹ reflecting deep discrimination against economically disadvantaged women who are unable to access necessary healthcare, including reproductive healthcare.⁸²

36. In addition, the detention of women in these circumstances is often accompanied by a lack of due process,⁸³ with women suffering systemic violations of their procedural rights such as a lack of effective legal assistance,⁸⁴ the irregular collection of evidence, such as the practice of extracting confessions from women seeking emergency care,⁸⁵ and the assessment of evidence through a gendered lens based on stereotypes concerning women's role in society.⁸⁶

37. The Working Group is also concerned about other laws, policies and practices which result in the detention of pregnant women, or women who have just given birth. Pregnant

⁷² Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 33, paras. 47(a) and 51(l); Opinions No. 19/2020, para. 73; No. 68/2019, para. 115.

⁷³ A/68/340, paras. 13–15.

⁷⁴ A/HRC/31/57, para. 42; A/HRC/32/44, para. 79.

⁷⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, para. 18.

⁷⁶ Human Rights Committee, General comment No. 36, para. 8; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 22, para. 10.

⁷⁷ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 22, para. 10; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, para. 18; A/HRC/31/57, paras. 14, 43–44.

⁷⁸ Opinions No. 19/2020; No. 68/2019; E/C.12/SLV/CO/3-5, para. 22; CEDAW/C/SLAV/CO/8-9, para. 37 (b).

⁷⁹ Opinion No. 68/2019, para. 110.

⁸⁰ *Ibid.*, para. 114.

⁸¹ Opinion No. 68/2019, paras. 100, 114; OHCHR, 'Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein at the end of his mission to El Salvador', 2017, <www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22412&LangID=E>.

⁸² A/HRC/32/44, para. 80; Opinion No. 68/2019, para. 114.

⁸³ CCPR/C/SLV/CO/7, para. 16; Opinion No. 68/2019, paras. 86–97.

⁸⁴ A/HRC/17/26/Add.2, para. 68.

⁸⁵ A/HRC/22/53, para. 46.

⁸⁶ Opinion No. 68/2019, para. 102.

women must not be shackled or otherwise restrained during transfers to hospitals, gynaecological examinations and birth.⁸⁷ Laws, policies and practices which result in the post-delivery detention of women and their new-born children in public and private health-care facilities due to their inability to pay their medical bills⁸⁸ are *prima facie* discriminatory and may constitute an arbitrary deprivation of liberty. In addition, civil laws which allow for the confinement and involuntary treatment of pregnant women suspected of substance abuse are also *prima facie* discriminatory in that a woman's pregnancy, and therefore her gender, is the factor leading to the deprivation of liberty.⁸⁹ Any confinement of women in these circumstances must take place voluntarily and be accompanied by sufficient due process guarantees.⁹⁰

38. Finally, States must ensure that women's rights to sexual and reproductive health are respected and ensured during any periods of detention. Women must not be subject to forced or coerced sterilization whilst in detention, including in administrative detention or detention in health-care facilities,⁹¹ and must not be detained for the purpose of forcibly administering such services.

Detention of LGBTIQ+ persons

39. Lesbian, bisexual, transgender and queer women and intersex persons continue to be subject to arbitrary arrests and detention solely by reason of their sexual orientation or gender identity or expression. In addition, when deprived of their liberty, LGBTIQ+ persons are at significant risk of violence, sexual abuse and other violations of their human rights.

40. The arrest or detention of individuals based on discriminatory grounds, including on the basis of their actual or perceived sexual orientation or gender identity, is *per se* arbitrary under international law and in violation of articles 2 (1), 3 and 26 of the Covenant and articles 2 and 7 of the Universal Declaration of Human Rights.⁹²

41. The criminalization of sexual relations between consenting adults, or of a person's gender identity and expression, such as laws prohibiting cross-dressing or imitating persons of the opposite sex,⁹³ is *prima facie* discriminatory and constitutes an arbitrary interference with the privacy of individuals in violation of article 17 of the Covenant and article 12 of the Universal Declaration of Human Rights.⁹⁴ Accordingly, the arrest and detention of LGBTIQ+ persons on the basis of such laws is arbitrary not only as it constitutes a violation of international law on the grounds of discrimination based on sexual orientation or gender identity,⁹⁵ but also because there is no legal basis for such detention as such laws violate States' obligations under the Covenant and the Universal Declaration of Human Rights.⁹⁶

42. In addition, the arrest and detention of LGBTIQ+ persons on the basis of their sexual orientation or gender identity, such as in relation to morality, debauchery, crimes against the order of nature, public or grave scandal, or indecent act offences⁹⁷ are similarly discriminatory and in violation of international law.⁹⁸

⁸⁷ Bangkok Rules, rule 24; Nelson Mandela Rules, rule 48 (2); CAT/C/USA/CO/2, para. 33; A/74/137, para. 22.

⁸⁸ A/74/137, para. 23; CAT/C/KEN/CO/2, para. 27; WHO/RHR/14.23.

⁸⁹ A/HRC/36/37/Add.2, paras. 72–74.

⁹⁰ *Ibid.*, para. 94 (b).

⁹¹ CAT/C/KEN/CO/2, para. 27; CAT/C/NAM/CO/2, paras. 34–35.

⁹² Opinions No. 14/2017; No. 25/2009; No. 42/2008; No. 22/2006; No. 7/2002; CCPR/C/50/D/488/1992.

⁹³ A/HRC/29/23, paras. 15, 44.

⁹⁴ CCPR/C/50/D/488/1992; A/HRC/45/16/Add.2, para. 45; Opinion No. 14/2017, para. 47.

⁹⁵ A/HRC/36/38, para. 8(b) and (e); Opinion No. 14/2017, para. 50.

⁹⁶ A/HRC/36/38, para. 8(a); Opinion No. 14/2017, para. 49. See generally International Commission of Jurists, *Yogyakarta Principles – Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity* (2007), principles 7–10.

⁹⁷ A/HRC/29/23, para. 44.

⁹⁸ Opinion No. 7/2002, para. 28; A/HRC/19/41, para. 47.

43. States must urgently review any such criminal laws and amend or repeal any provisions which discriminate against the LGBTIQ+ community to bring them into line with international standards.⁹⁹

44. Practices such as “reparative therapies” or “conversion therapies”, as well as other forms of intrusive and irreversible treatments, continue to be forcibly administered upon LGBTIQ+ persons without their consent and in violation of their human rights.¹⁰⁰ LGBTIQ+ persons must not be detained for the purposes of forcibly administering such therapies, both in private and public facilities such as hospitals, psychiatric institutions, specialized camps, places of worship or in the home.¹⁰¹

45. LGBTIQ+ persons are particularly vulnerable to discrimination, violence and torture and ill-treatment contrary to international human rights law when deprived of their liberty.¹⁰² The Working Group is concerned by ongoing reports of disproportionate and systemic gender-based violence and abuse against LGBTIQ+ persons in detention, particularly the significantly higher prevalence of sexual assault against LGBTIQ+ persons, including the “corrective rape” of lesbian detainees.¹⁰³ To the extent that these conditions contravene the prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatment and are employed with a purpose to punish, coerce a confession or to further discriminate against LGBTIQ+ persons, the detention of those persons is arbitrary.¹⁰⁴

46. States must take measures in order to protect the rights of LGBTIQ+ persons in detention, and to address their specific and unique needs, including establishing appropriate gender-specific conditions of detention.¹⁰⁵

47. Transgender women should not be automatically placed in male prisons, noting their increased risk of sexual assault and rape.¹⁰⁶ The facilities in which LGBTIQ+ persons are placed should be determined on a case-by-case basis, having due regard to each individual’s gender identity and expression,¹⁰⁷ and in accordance with the provisions of the Bangkok Rules.

Detention of non-nationals, including migrants, asylum seekers and refugees

48. The Working Group reiterates that States are obliged to respect and ensure the rights, including the right to personal liberty, of everyone within their territory or subject to their jurisdiction regardless of nationality or statelessness.¹⁰⁸ Accordingly, States have an obligation to ensure that non-national women, including migrants, asylum seekers and refugees are not arbitrarily deprived of their liberty within their territory or subject to their power or effective control. This includes the administrative detention of women non-nationals in immigration detention, whether in recognized or non-recognized centres.

49. Any deprivation of liberty in the context of migration must meet the standards set out in article 9 of the Covenant. In particular, administrative detention of women migrants must be an exceptional measure of last resort, applied for the shortest period and only if less restrictive alternatives have been considered and found inadequate to meet legitimate purposes.¹⁰⁹

⁹⁹ A/HRC/45/16/Add.2, para. 45; A/HRC/29/23, para. 15.

¹⁰⁰ A/HRC/22/53, para. 88; A/HRC/40/60, para. 54.

¹⁰¹ A/HRC/41/33, para. 35.

¹⁰² See, e.g. CAT/OP/C/57/4, paras. 60–67; A/HRC/31/57, para. 13.

¹⁰³ A/HRC/29/23, paras. 34–38; A/HRC/31/57, para. 35; CAT/C/CRI/CO/2, para. 11; CEDAW/C/MOZ/CO/3-5, paras. 41(c), 42(e); A/HRC/19/41, para. 35.

¹⁰⁴ See, e.g. Opinion No. 25/2009, paras. 28, 31.

¹⁰⁵ Bangkok Rules, rules 40–42; A/HRC/31/57, para. 70(a); A/HRC/45/16/Add.1, para. 52.

¹⁰⁶ CAT/OP/C/57/4, para. 76; A/HRC/17/26/Add.2, para. 29.

¹⁰⁷ Nelson Mandela Rules, rule 7 (a); A/HRC/31/57, para. 70(s); CAT/OP/C/57/4, para. 76.

¹⁰⁸ Human Rights Committee, General comment No. 31, para. 10; Human Rights Committee, General comment No. 35, para. 3.

¹⁰⁹ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 12; OHCHR, ‘Recommended Principles and Guidelines on Human Rights at International Borders’, Guideline 8.1.

50. Detention in the course of migration proceedings must be justified as reasonable, necessary and proportionate in the light of the circumstances specific to the individual case.¹¹⁰ Accordingly, the detention of migrant women must only take place in the context of an effective individualized assessment of the necessity of detention,¹¹¹ and States must seriously consider alternatives to detention.¹¹²

51. The detention of women non-nationals who are pregnant or are nursing shall be avoided.¹¹³ Where migrant women are accompanied by their children, States must consider alternatives to detention for the entire family unit in each individual case,¹¹⁴ particularly because children cannot be detained by reason of their parent's migration status,¹¹⁵ and should not be separated from their parents.¹¹⁶

52. The Working Group is particularly concerned that women asylum seekers and refugees are routinely deprived of their liberty for extended periods pending the resolution of their claims. The prolonged administrative custody of women asylum seekers, immigrants or refugees without the possibility of administrative or judicial review or remedy constitutes arbitrary detention.¹¹⁷

53. Particularly given the prolonged nature of immigration detention, the Working Group reiterates the obligations of States to ensure that conditions in immigration detention address the gender-specific needs of women detainees.¹¹⁸ In particular, women non-nationals should be separated from men, unless they are part of a family unit.¹¹⁹

Women human rights defenders

54. Human rights defenders are often deprived of their liberty as a result of the exercise of their fundamental rights under articles 18, 19, 20 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 18, 19, 21, 22 and 25 (1) of the Covenant. Further, it is recalled that human rights defenders fall within their own protected class for the purposes of determining whether an individual has been detained on a discriminatory ground for the purposes of Category V.¹²⁰

55. The Working Group is gravely concerned by the frequent complaints it receives in relation to women human rights defenders, including women's rights activists.¹²¹ It is clear

¹¹⁰ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 14.

¹¹¹ A/HRC/36/37/Add.2, para. 29.

¹¹² Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 16; Human Rights Committee, General comment no. 35, para. 45; Opinion No. 2/2019, para. 79.

¹¹³ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 41; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32, para. 34; A/HRC/20/24, paras. 36, 49.

¹¹⁴ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 40; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32, para. 49.

¹¹⁵ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 40; principle 21, para. 46; Opinion No. 2/2019, para. 105.

¹¹⁶ A/HRC/36/37/Add.2, paras. 43–46, 92 (j).

¹¹⁷ A/HRC/36/38, para. 8(d).

¹¹⁸ Bangkok Rules, rule 1; A/HRC/20/24, para. 37; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32, para. 34.

¹¹⁹ Revised deliberation No. 5 on deprivation of liberty of migrants (A/HRC/39/45, annex), para. 42; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 32, para. 34.

¹²⁰ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 26; Opinion No. 45/2016, para. 44. See also UNGA Res 53/144 (adopting the Declaration on Human Rights Defenders) and UNGA Res 68/181.

¹²¹ See, e.g. Opinions No. 33/2020, paras. 4–5, 11 (women's rights activist, charged, among other things, with "participating in demanding women's rights"); No. 14/2020, para. 4 (arbitrary detention of a women's rights advocate); No. 57/2017, para. 4 (arbitrary detention of an activist for women's and LGBTIQ+ rights); No. 48/2017, paras. 4, 47 (woman human rights defender verbally attacked by the judge for her beliefs in feminism and human rights); No. 1/2016, para. 4 (activist for the rights of Kurdish women); For targeting of girl human rights defenders, see, e.g. A/HRC/40/60, paras. 59–60; UA ISR 1/2018.

that in many cases women are targeted because of their activities as human rights defenders, including peaceful advocacy, demonstrations and other forms of activism.¹²²

56. The Working Group is of the view that women human rights defenders face risks that are gendered and intersectional.¹²³ Indeed, numerous complaints received by the Working Group allege that women human rights defenders have been subjected to harassment,¹²⁴ sexist attacks,¹²⁵ torture and threats of sexual assault,¹²⁶ demands to undergo virginity testing,¹²⁷ institutionalization or threats thereof,¹²⁸ and public shaming.¹²⁹ The Working Group reiterates that States must ensure that women human rights defenders can perform their important role in accordance with international human rights law, including ensuring that they are not subject to excessive or indiscriminate use of force, arbitrary arrest or detention, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, enforced disappearance, abuse of criminal and civil proceedings or threats of such acts.¹³⁰

Women in political and public life

57. The Working Group is concerned about complaints of arbitrary deprivation of liberty it has received relating to women's participation in political and public life, including the targeting of women who hold public office or seek to do so and women who have been publicly critical of the Government or who are members of opposition groups.¹³¹ In these circumstances, arbitrary deprivation of liberty is not only a direct attack on the full participation by women in political and public life and their enjoyment of their human rights, but may also discourage the participation of women in public discourse more broadly and marginalize their voices.

58. The right to participate in public affairs is provided for in article 21 of the Universal Declaration of Human Rights and article 25 of the Covenant.¹³² These rights are furthered by the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association under articles 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 19, 21 and 22 of the Covenant. In this regard, the Working Group recalls that criticism of Government is permissible in a democratic society and protected by the freedom of opinion and expression.¹³³

59. When a woman is arrested and detained as the consequence of the exercise of the aforementioned rights, or when a woman is detained on the basis of discriminatory grounds such as sex, gender or political or other opinion, her deprivation of liberty may be considered arbitrary by the Working Group, including under categories II and V of its Methods of Work.

¹²² See, e.g. Opinions No. 9/2019 (9 year sentence for peaceful advocacy and activism); No. 83/2018 (7 year sentence for, among other things, social media posts and participation in peaceful assemblies); No. 61/2018 (arrested for working to investigate extrajudicial killings in the Philippines); No. 75/2017 (9 year sentence for posting information on the Internet critical of government policies on human rights issues); No. 57/2017 (arrested for social media posts); No. 1/2016 (Kurdish women's rights activist sentenced to life imprisonment).

¹²³ See A/HRC/40/60, para. 35.

¹²⁴ Opinions No. 61/2018, para. 71; No. 75/2017, para. 55; No. 48/2017, para. 49.

¹²⁵ Opinions No. 61/2018, para. 72; No. 50/2017, para. 7.

¹²⁶ Opinions No. 33/2020, para. 90; No. 78/2017, para. 39; No. 1/2016, paras. 37, 40, 42.

¹²⁷ Opinion No. 1/2016, para. 42.

¹²⁸ Opinion No. 57/2017, paras. 14, 68. See also A/HRC/40/60, paras. 54–55; CAT/C/KAZ/CO/3, para. 19.

¹²⁹ See, e.g. regarding threats to release altered images showing sexual activity: Opinions No. 61/2018, paras. 13–14, 29; No. 1/2016, para. 6. See generally A/HRC/40/60, paras. 37–39.

¹³⁰ See UNGA Res 68/181, para. 8.

¹³¹ Opinions No. 24/2019; No. 61/2018; No. 50/2017; No. 24/2015. See also A/68/340, para. 28. For a description of some of the ways that women are involved in political life, see A/73/301, para. 10.

¹³² Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, art. 7 specifically requires States Parties to take appropriate measures to eliminate discrimination against women in political and public life.

¹³³ See Human Rights Committee, General comment No. 34, para. 38.

Deprivation of liberty by private actors

60. The Working Group has affirmed on a number of occasions that it will consider deprivation of liberty in all its forms, not only for the purpose of criminal proceedings, but also under administrative and other fields of law.¹³⁴ The Working Group wishes to recall that the deprivation of personal liberty occurs when a person is being held without his or her free consent, including under house arrest.¹³⁵ Deprivation of liberty may also arise from the conduct of private actors.

61. States not only have a duty to ensure that anyone acting on their behalf, such as State authorities and its agents, do not infringe the right to personal liberty; they also have a positive obligation to protect everyone in their territory or under their jurisdiction from violations of this right by private parties, as well as obligations to investigate and punish such violations and ensure that victims have access to effective remedies.¹³⁶ The Working Group urges States to ensure that the right to personal liberty of all women is respected in relation to the conduct of both State and non-State actors.

62. Guardianship laws, customs and social practices that prevent women from leaving their family homes without the permission of a guardian may result in de facto deprivation of liberty by their families.¹³⁷ This is a breach of both articles 12 and 26 of the Covenant and articles 7 and 13 of the Universal Declaration of Human Rights, and amounts to discrimination on the basis of sex or gender. The Working Group calls upon States to abolish systems of guardianship immediately.

63. Migrant women who are prevented from leaving the residences where they are employed as domestic workers are subjected to de facto deprivation of liberty.¹³⁸ The Working Group has received credible reports of employers withholding employees' documents (including passports) and salaries, to ensure that they would not leave. Employers have reportedly resorted to false accusations of absconding as a way of exerting control over their workers which in turn may lead to the arrest and detention of the worker by State authorities.¹³⁹ The Working Group calls upon States to ensure that all migrants are free to leave the homes of their employers if they choose to do so.

64. Women who are subject to trafficking, slavery and slavery-like practices are the subject of numerous human rights violations by private actors,¹⁴⁰ including deprivation of liberty as guaranteed by article 9 of the Covenant and article 3 of the Universal Declaration of Human Rights.

65. The Working Group recalls that when private actors are empowered or authorized by a State to exercise powers of arrest or detention, the State remains responsible for the actions of the private actors under international human rights law.¹⁴¹

Deprivation of liberty related to "honour"

66. The arrest and detention of women pursuant to laws and policies that are gender-neutral may violate the right to equality and non-discrimination where they are

¹³⁴ See, e.g. Opinion No. 38/2020, para. 36 referring to A/HRC/30/37, annex, para. 47. See also Human Rights Committee, General comment No. 35, para. 5; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, paras. 24–26; A/HRC/41/33, para. 10.

¹³⁵ See A/HRC/30/37, para. 9.

¹³⁶ Human Rights Committee, General comment No. 31, paras. 8, 15, 18; Human Rights Committee, General comment No. 35, para. 7; A/HRC/45/16/Add.2, paras. 79–84.

¹³⁷ See, e.g. A/HRC/45/16/Add.2, paras. 80, 82, 84; AL SAU 4/2019.

¹³⁸ A/HRC/45/16/Add.2, paras. 81–84; A/HRC/44/57/Add.1, para. 29; International Labour Organization, 'Intertwined: A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon', 2016, pp. 33–35.

¹³⁹ A/HRC/45/16/Add.2, para. 81.

¹⁴⁰ See, e.g. Universal Declaration of Human Rights, arts. 4, 5, 13; International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 7, 8, 12. See further, OHCHR, 'Abolishing Slavery and its Contemporary Forms', 2002, pp. 3–9.

¹⁴¹ Human Rights Committee, General comment No. 35, para. 8; International Law Commission, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ch II.

disproportionately applied to women or where they result in harsher sentences for women than men. This includes “honour”-related offences such as adultery or extramarital sexual relations.¹⁴² Moreover, “honour”-related offences found in a State’s criminal law may amount to a violation of international human rights law if they are not gender-neutral and specifically discriminate against or target women. The Working Group considers that laws and policies falling into either of these categories, that is, all “honour-based” offences, must be decriminalized.

67. The detention of women in relation to “honour”-based offences which are not criminalized in a State’s criminal laws lacks a legal basis and amounts to arbitrary detention.¹⁴³

68. States should ensure that evidentiary rules and procedures do not in practice discriminate against women.¹⁴⁴ Laws and corroboration requirements that are influenced by gender stereotypes or that disproportionately burden women in proving their innocence in the context of “honour”-related offences may be discriminatory and amount to a denial of the presumption of innocence.¹⁴⁵ Women who are the victims of criminal acts such as rape (whether or not proven to the requisite standard in a criminal trial) must not be charged and detained in relation to such acts on the basis that they have perpetrated an “honour”-related offence.¹⁴⁶

Protective custody

69. Detention of women in administrative detention or so-called “protective custody” for the purposes of their protection will amount to arbitrary detention and may amount to torture or ill-treatment.¹⁴⁷ This includes detention to protect women from gender-based violence including in relation to “honour”-based crimes, as well as detention that seeks to ensure that a woman will testify against an offender in court. States are required to take measures to ensure the protection and safety of women and should do so using measures that do not jeopardize women’s liberty.

70. In exceptional cases, temporary measures involving custody to protect a woman may be applied but only when necessary and expressly requested by the woman concerned and, in all cases, subject to supervision by judicial or other competent authorities.¹⁴⁸ Such protective measures shall not be continued against the will of the woman concerned. The release of a woman shall not be made conditional upon the consent of a male relative and/or a guarantor.¹⁴⁹

Shelters, rehabilitation centres and medical facilities

71. The Working Group observes that arbitrary detention can occur in health-care settings, such as psychiatric hospitals and other institutions where individuals may be deprived of their liberty.¹⁵⁰

72. While homes and shelters provide vital social care to vulnerable groups, particularly women and children facing domestic violence, efforts must be made by States to ensure that

¹⁴² A/HRC/41/33, para. 31; A/HRC/45/16/Add.2, para. 43. The emerging criminalisation of women participating in social media is also of concern, see AL EGY 12/2020.

¹⁴³ Universal Declaration of Human Rights, art. 11 (2); International Covenant on Civil and Political Rights, arts. 9 (1), 15 (1); see, e.g. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, ‘In Search of Justice for Crimes of Violence Against Women and Girls’, 2020, p. 13.

¹⁴⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, para. 29 (c)–(d).

¹⁴⁵ Universal Declaration of Human Rights, art. 11 (1); International Covenant on Civil and Political Rights, art. 14 (2).

¹⁴⁶ A/68/340, paras. 16–18; CEDAW/C/BLR/CO/8, para. 26.

¹⁴⁷ A/HRC/27/48, paras. 78–79; A/HRC/31/57, para. 24; E/CN.4/2003/75, paras. 90–91; E/CN.4/2003/8, para. 65; A/HRC/41/33, para. 45; CEDAW/C/JOR/CO/6, paras. 33–34.

¹⁴⁸ International Covenant on Civil and Political Rights, art. 9 (1) and (4); Bangkok Rules, rule 59.

¹⁴⁹ A/HRC/20/16/Add.1, para. 28; CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paras. 61–62; AL SAU 4/2019.

¹⁵⁰ Opinion No. 70/2018, para. 37.

residents in such facilities are able to leave if they wish, including through regular monitoring of the facilities and support in reintegrating into the community.¹⁵¹

73. The Working Group is concerned about the detention of women in rehabilitation centres, treatment programmes and psychiatric hospitals for reasons relating to the breaching of societal norms.¹⁵² The health-care system can never be used as a pretext for depriving women of their liberty in circumstances relating to the exercise of their fundamental rights and freedoms.¹⁵³

74. The Working Group reiterates that deprivation of women's liberty on the basis of actual or perceived disability is discriminatory and contrary to international law.¹⁵⁴ The Working Group has received information on mental health laws which authorize involuntary hospitalization based on an actual or perceived psychosocial disability, and mental health treatment without obtaining the free and informed consent of the persons concerned or providing the appropriate support to enable them to exercise their legal capacity. This form of confinement is justified using criteria such as danger to the confined person or others and/or the need for care and treatment, which is inherently discriminatory since it is based on the person's actual or perceived impairment.¹⁵⁵ The Working Group is concerned about cases where women have been subjected to prolonged periods of detention in psychiatric institutions in violation of their human rights. In some cases, they are subjected to "voluntary hospitalization", but without their informed consent to treatment and without the ability to leave at any time.

75. The voluntary institutionalization of women with psychosocial disabilities needs to take into account their vulnerable position and their likely diminished capability to challenge their detention. If a woman does not have legal assistance of her own or of her family's choosing, effective legal assistance through a defence lawyer is to be assigned to act on her behalf and the necessity of continued institutionalization is to be reviewed regularly at reasonable intervals by a court or a competent independent body in adversarial proceedings and without automatically following the expert opinion of the institution where the woman is held.¹⁵⁶ Where detention is based on consent given by a woman's legal guardian, the woman should have the possibility of challenging the appointed guardian.¹⁵⁷ A woman is to be released if the grounds for hospitalization no longer exist. Involuntary institutionalization of women with psychosocial disabilities and forced treatment is prohibited.¹⁵⁸

COVID-19 and public health emergencies

76. The Working Group stresses that States should ensure that measures taken in relation to the COVID-19 pandemic take into account their specific impacts on women in detention. Pregnant women and women who are breastfeeding should be treated as particularly vulnerable.¹⁵⁹

77. States should urgently review existing cases of deprivation of liberty of women in all detention settings to determine whether the detention is still justified as necessary and proportionate in the prevailing context of the COVID-19 pandemic.¹⁶⁰ In doing so, States should consider all alternative measures to custody.

¹⁵¹ A/HRC/42/39/Add.1, paras. 81, 88, 94 (b); A/HRC/39/45/Add.2, para. 89 (b).

¹⁵² CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 42; A/HRC/41/33, para. 47; A/68/340, para. 22.

¹⁵³ See, e.g. Opinion No. 57/2017, para. 68. See also A/HRC/40/60, paras. 54–55; CEDAW/C/BLR/CO/8, paras. 16–17.

¹⁵⁴ Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 14; A/HRC/36/37/Add.1, paras. 36–37; A/HRC/30/37, annex, para. 103.

¹⁵⁵ A/HRC/36/37/Add.2, para. 75.

¹⁵⁶ A/HRC/36/37/Add.2, para. 76; A/HRC/30/37, annex, para. 105; Opinion No. 70/2018, para. 49.

¹⁵⁷ Opinion No. 70/2018, paras. 46–48. See Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 12.

¹⁵⁸ A/HRC/30/37, annex, para. 103.

¹⁵⁹ Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies (A/HRC/45/16, annex II), para. 15.

¹⁶⁰ Ibid, para. 13; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 'Guidance Note on CEDAW and COVID-19', para. 7,

78. Where custody cannot be avoided, States must ensure that women are held in conditions that are sanitary and that necessary protection measures are undertaken to ensure the safety and wellbeing of women detainees, including physical distancing, provision of protective items and quarantining of persons showing symptoms.¹⁶¹ States should ensure that women in detention have access to COVID-19 testing and vaccines. States should ensure that preventative healthcare including screening for breast and gynaecological cancer continue to be provided to women in detention or are resumed when safe to do. Specific efforts to mitigate negative mental health impacts of COVID-19 measures for women in detention should also be undertaken.¹⁶²

79. States should ensure that changes to detention regimes, including isolation and limits to contact with the outside world, do not unduly impact women. This includes measures that prevent women in detention from accessing items and supplemental food ordinarily provided by family and support networks on which they rely.¹⁶³

80. The Working Group notes that emerging research has linked lockdown measures with significant increases in reports of gender-based violence.¹⁶⁴ States should ensure that any COVID-19 measures that impose restrictions on movement amounting to deprivation of liberty¹⁶⁵ do not deter, prohibit or punish women from taking steps to escape gender-based violence. Moreover, States should take proactive steps to ensure that measures are in place to support victims of violence during the COVID-19 pandemic, including access to resources, hotlines and a sufficient number of shelters throughout the State.

Impacts on women of deprivation of liberty of partners and family members

81. States should recognize that women are particularly affected by the arbitrary detention of partners and family members. Arbitrary detention of partners and family members may lead to women assuming additional caregiving responsibilities, facing stigma or discrimination within their communities and experiencing financial hardship.

82. Women must be able to support and seek justice for detained partners or family members without placing their security or liberty at risk.¹⁶⁶ They should be able to visit persons in detention facilities without being subjected to unnecessary invasive and humiliating searches, or to sexual violence such as rape.¹⁶⁷

<tbineternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/STA/9156&Lang=en>.

¹⁶¹ UA USA 34/2020.

¹⁶² OHCHR, 'Leading human rights experts call for overdue implementation of the UN Bangkok Rules a decade after they were adopted', 2020, <www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/BangkokRules-leaders-statement_EN.pdf>.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ UN Women, 'From insights to action: Gender equality in the wake of COVID-19', p. 10; European Commission, '2021 report on gender equality in the EU', pp. 4–6.

¹⁶⁵ The Working Group has previously noted that mandatory quarantine in a given premise, including in a person's own residence that the quarantined person may not leave for any reason, is a measure of de facto deprivation of liberty, see Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies (A/HRC/45/16, annex II), para. 8.

¹⁶⁶ See, e.g. Opinion No. 21/2019, para. 17 (10 women and 3 girls were arbitrarily detained and tortured for peacefully demonstrating against the detention of political opponents, some of whom were their relatives).

¹⁶⁷ See, e.g. Opinion No. 73/2019, para. 95. See also A/HRC/22/44/Add.2, para. 72; A/HRC/31/57/Add.4, paras. 37–41. Such searches are likely to be contrary to Nelson Mandela Rules, rules 52 and 60.

83. Women should not be deprived of their liberty or subjected to violence during the arrest and detention of a partner or family member.¹⁶⁸

84. Women must not be made the subject of threats, especially of sexual violence, in order to induce a detained partner or family member to make a confession.¹⁶⁹

Consequences of arbitrary deprivation of liberty

85. Arbitrary deprivation of liberty can have long-lasting, harmful impacts on women's lives and on those of their families. These may include stigma and social alienation, deterioration of mental and physical health, loss of parental rights, breakup of the family unit, loss of income, and challenges obtaining employment and housing.¹⁷⁰

86. States should ensure that women in detention are provided with gender-specific rehabilitation, treatment, vocational training and educational opportunities in order to equip them for successful reintegration into society.¹⁷¹

[Adopted on 12 May 2021]

¹⁶⁸ Opinions No. 31/2019, paras. 8–9, 38 (woman detained and tortured after refusing to become an informant in exchange for the release of her son); No. 18/2011, paras. 4, 5, 19 (arrest and detention of wife and close family members to induce detainee's surrender and as reprisals for demanding a fair trial and basic human rights).

¹⁶⁹ Opinions No. 33/2017, paras. 90–91 (threats made during interrogation to rape mothers and sisters of detainees); No. 29/2016, para. 20 (threat of rape of family members); No. 14/2016, paras. 10, 12, 13 (threat to arrest family members and place children in social care).

¹⁷⁰ See, A/68/340, paras. 66–80.

¹⁷¹ See among others, Bangkok Rules, rule 46.